

Al final del franquismo y durante los años de su adaptación al nuevo orden democrático actual, participamos en un proceso de crítica social al socaire de unas ideas y de una actividad que nos envolvían y que, a la vez, modificábamos. Hoy estamos al margen, sin quererlo; no por posicionamiento, como alternativa, sino como resultado de todo aquel proceso. Incómodos en esta marginalidad quisiéramos mejor entenderla y entender el proceso que a ella nos ha llevado: ver donde estamos y cómo podríamos modificarlo. En este número de ETCETERA volvemos la vista atrás sólo para ver mejor hacia adelante; pensar, de nuevo, aquellos años para entender los que se acercan.

*Fruto de nuestras discusiones sobre aquellos años y como inicio de un debate sobre ello, presentamos bajo el título **Transición a la modernidad y Transacción democrática** diversos cortes y análisis que aunque incipientes y fragmentarios creemos que pueden servir de incitación para una discusión más amplia. A este debate os invitamos.*

Etcétera, Barcelona, abril 1995

De a donde conduce los guías, los representantes, el colaboracionismo y otros engendros.

Empezaron dirigiéndonos; no estábamos maduros para decidir. Continuaron acallándonos; no había que enfadar a los fácticos. Siguieron cerrándonos la voz y los espacios; el engaño, esta vez, fue con el "terrorismo" y el yonky. Han proseguido metiéndonos miedo con el inmigrante; son lo otro. Hoy, los ladridos de las gentes de orden se oyen con más fuerza. Nunca se fueron: no tuvieron necesidad. Ahora quieren todo de nuevo... Mejor así. Sin caretas ni señuelos todo aparece claro: o acabamos con ellos o terminarán por encadenar al SOL, alambrar la LUNA y colocarnos un microchip por corazón. El camino ya apunta ¿verdad! Su democracia se ha empezado a escribir con alambre de espino y a la LIBERTAD quieren hacerle sitio en una cárcel, que llaman libertad, por subversiva.

Pablo Serrano

La Leyenda de la Transición (Notas para un debate sobre la transición española de la dictadura franquista a la democracia)

Volver la vista atrás, hacia este pasado inmediato, próximo y a la vez tan lejano..., nos parece pertinente cuando vemos montar sobre él tanta leyenda que dificulta y encubre pensar lo sucedido, saber dónde estamos y comprender por qué estamos donde estamos.

No es fácil volver sobre un período, caracterizarlo, comprenderlo; escoger los rasgos más definitorios, organizarlos en torno a un significante...; realizar un trabajo de interpretación a partir del yo que interpreta y periodiza el fluido de acontecimientos y les da un significado.

Vaya pues, por delante, este sujeto; desde donde volvemos la mirada. Hoy nos sabemos más solos, más ciegos, más viejos al tener menor certeza de que el futuro será cual lo imaginamos. El espacio que nos rodea lo apercibimos más cerrado, más obtuso, más oscuro. La relación entre las personas, más mediática, más institucionalizada, más subsidiaria: necesitamos más objetos que medien en nuestras relaciones, el Estado se ocupa de más cosas y más de nuestras cosas, otros actúan por mí y por mi relación con el otro. Las ideas circulantes respecto a la familia, a la escuela, a la droga, al sexo, respecto a la cárcel, a la delincuencia, a un posible cambio social,... las apercibimos más reaccionarias, más uniformes, menos personales, más estereotipadas. La creación (¿por más subvencionada?) la creemos más escasa. El tiempo libre, no pillado por los objetos, por el Estado, por la economía, lo sabemos menor.

Vaya por delante que decir que estamos mal y que en aspectos fuertes de lo social hemos ido a peor, no es decir que somos partidarios de lo otro, de lo anterior. Contra ello pusimos nuestra razón y nuestra acción; y hoy lo odiamos igual que antaño. Pero no siempre afirmar que hemos ido a peor es reaccionario, aunque suele serlo. Como no lo era cuando Rousseau respondía en este sentido a la pregunta que ofrecía en concurso público, en 1749, la Academia de Dijon: “Si el progreso de las ciencias y de las artes ha contribuido a corromper o a mejorar las costumbres”, respuesta que era el inicio de un pensamiento y una sensibilidad que abrían el paso al Romanticismo y a la Revolución.

Una dificultad se añade a la antes mencionada del mismo quehacer del conocimiento histórico al periodizar un segmento de esta historia, y es la confluencia (simultaneidad solo cronológica) en este período de dos fenómenos. El final del franquismo coincide con el fin de un tipo de sociedad (Estado del Bienestar, taylorismo), con el fin de una sensibilidad, de unas ideas (contracultura de los años sesenta),... Estamos dejando un mundo y entrando en otro.

La leyenda

Al volver la vista atrás sobre estos cortos años desde la muerte de Franco (1975) hasta la nueva constitución democrática (1978), las elecciones parlamentarias (1977) que dan la victoria a la UCD y las elecciones del 82 que entronizan al PSOE, se ha caracterizado este período como Transición.

Desde enfoques distintos (Morán, Subirats, Carr-Fusi, Imbert), ya sea subrayando la continuidad sociológica y la falta de ruptura por parte de una izquierda que quería ir más allá, ya sea enfatizando el cambio hasta darle una trascendentalidad que lo hacía exportable por parte de las posiciones más gubernamentales, se ha vestido la Transición con hábitos que no le son propios, ampliando unos rasgos político-administrativos hacia otras transformaciones sociales que ya habían tenido lugar, propias de una fase anterior (los años 60). Con ello se confunde el punto de partida (de la dictadura) y el punto de llegada (a la democracia). Es sobre esta confusión que queremos discurrir.

Esta Transición en mayúsculas se presenta, más allá de unos cambios administrativos, como el paso del obscurantismo a la modernidad, del miedo a la libertad. Esta es la leyenda. La necesaria adecuación de las formas políticas a las exigencias de la acumulación del capital en España, la tarea central de la Transición, se reviste de cambios ya habidos, arrojando una Transición en mayúsculas, una abstracción no detallada, un todo sin nada, fetichizada, que suplirá una discusión necesaria sobre qué pasó y por qué, sobre dónde estamos ahora y por qué.

En los años 60 hay en España una transformación importante que va desde las estructuras socioeconómicas hasta la personalidad de base de los españoles: se deja atrás una sociedad agraria-industrial, de escasa movilidad, y se avanza hacia una sociedad de corte capitalista monopolista, con fuertes migraciones en el interior y hacia el exterior, con cambios importantes en la vida cotidiana. Se puede hablar de una transición de un tipo de sociedad a otra, de una transformación en las costumbres, en la vida cotidiana de la gente,... Por esto, a la muerte del dictador, el recambio capitalista es tan fácil: todo está preparado, sólo hay que evitar un posible

desbordamiento del movimiento obrero y social, para lo cual bastará con un Pacto. Por esto la Transición se queda en Transacción y evita así la posible profundización en las transformaciones operadas en la década anterior.

Otra cosa es explicar por qué un posible desbordamiento no se produce; por qué es suficiente, para evitarlo, una estrategia de pactos y compromisos de las fuerzas políticas que se anuda básicamente en los Pactos de la Moncloa (1977); por qué aquel movimiento obrero y social asambleario, autónomo, no va más allá e impone una ruptura; por qué aquellas expectativas de cambio y de transformación social de tendencia anticapitalistas, a caballo de un mismo movimiento más general de la época (contracultura, huelgas salvajes, mayo francés, insumisión social que se traduce en autorreducciones, antipsiquiatría, etc.) se desvanecen, e incluso se transforman en su contrario, afianzándose una ideología resignada y cínica que entiende que lo que hay es todo lo que puede haber. Quizás también aquí cabe hablar de otra leyenda que auparía esta leyenda de la Transición (como la leyenda de la revolución de Octubre aupó la actual leyenda del fin del comunismo): la suposición de un movimiento con una radicalidad que no tenía; el privilegio de unos rasgos, de unas militancias; sin hacer mayor hincapié en la debilidad estructural del nuevo movimiento obrero de los años 60, en la naturaleza del ciclo de luchas de los años 70 y en el marco internacional de la lucha de clases.

Si hoy queremos volver sobre todo esto y para ello afirmamos, valoramos, hacemos hipótesis,... es para ver lo que ello puede aportarnos para entender el momento actual en que estamos. No se trata de hacer cuadrar el pasado con nuestras ideas sino de entenderlo.

La transición que ya fue

Antes de morir Franco el franquismo estaba agotado. La lucha de clases había seguido su curso después de la derrota proletaria (1937). El franquismo lleva hacia su término la revolución burguesa (industrializa, urbaniza, proletariza) que quedaba aún pendiente.

Se trataba, en nuestro caso, de una revolución burguesa atípica: La crisis de 1868 se resuelve con un Pacto social entre la aristocracia y la burguesía (la Restauración de 1874), perdiendo la burguesía la reivindicación democrática y de reforma agraria típicas (con la desamortización los burgueses acceden a la tierra sin el previo “reparto” de tierras, tarea de la revolución burguesa).

De aquí que la revolución burguesa en España esté dirigida por la burguesía comercial y agraria y no por la burguesía industrial. Incluso en Cataluña, la parte más industrializada de España, nos encontramos hasta 1936 con una población obrera débil, concentrada en Barcelona y su comarca y agrupada en pequeñas empresas.

Población obrera en Cataluña

1877	250.903	14,32% de la población total.
1900	297.469	15,13
1920	500.000	20
1936	580.000	20

Concentrada en la provincia de Barcelona

1877	73%
1900	72%
1920	85%
1930	88%

y en pequeñas y medianas empresas:

Relación patrono y obreros en la industria y comercio (1920)

1:6,7	en Cataluña
1:8,6	en la provincia de Barcelona
1:7,1	en Barcelona ciudad

sólo en algunos sectores la concentración es importante:

Provincia de Barcelona (1927)

Construcción	1:24
Textil y ramo agua	1:77
Servicios públicos	1:162

(La Població obrera catalana, una població industrial? Pere Gabriel)

Es decir que la mitad de la población obrera en Barcelona provincia trabajaba en sectores donde la proporción media patrono/obrero era de 1:5 mientras que la otra mitad lo hacía en sectores de una proporción media de 1:56. Sólo la gran empresa llega a los 500 trabajadores, fuera de contadas excepciones como Maquinista o como Fabra y Coats que pasan de mil.

Después de los años de autarquía, del predominio de los terratenientes y de ciertas formas de capitalismo de Estado, el franquismo abre el paso hacia un capitalismo moderno, aunque sin efectuar reformas políticas o sociales: el capital monopolista de Estado. A partir de los años 60 se produce el gran proceso de industrialización. Mientras públicamente desde el régimen se desprecia lo foráneo, el interés privado consigue que el capital europeo y estadounidense inviertan grandes sumas en España, importándose bienes de equipo, energía, patentes, inventos... que se traducen en la creación de nuevas zonas industriales, fábricas, centrales eléctricas, pantanos, refinerías, lo que produce que cambie el paisaje urbano y rural y que genere un gran desdoblamiento del campo que se dirigirá hacia nuevas aglomeraciones urbanas. Acompaña a este proceso industrial la inseparable, aún incipiente, sociedad de consumo, transformándose la vida cotidiana con la llegada de la TV, el coche, el teléfono, los electrodomésticos.... Cambian las ideas con la movilidad (emigración y turismo), cambian las formas de negociación entre capital y trabajo (Convenios colectivos, 1958) y las formas de lucha de una clase obrera que se ha extendido por todo el país. El conjunto de estos cambios sustenta esta transformación, esta transición hacia la modernidad de la que la llamada Transición quiere apropiarse.

Repasemos algunas cifras que pueden ayudarnos a situar el conjunto de estos cambios. (HORIZONTE ESPAÑOL, 1966 y 1972. Ruedo Ibérico. DE L'ANTIFRANQUISME À L'APRÈS FRANQUISME. Brendel/SimónI).

Industrialización

El índice de conjunto de la producción industrial pasa de 100 refiriéndonos a 1929, a 338 en 1960. En 25 años (del 1940 al 65) la clase obrera industrial se triplica. De 1960 a 1963 la producción aumenta un 38,5%. Con el Plan de Desarrollo (1964-67) la inversión industrial se incrementa en un 25%, la productividad aumenta un 5,5% y el PIB aumenta un 10%.

Población activa	1940	1969	1970
Agricultura	52%	41,3%	26%
Industria	24%	31,8%	38%
Servicios	24%	26,5%	

Urbanización

Del 1939 al 1951 un millón seiscientos mil españoles abandonan el campo hacia municipios de más de 50.000 habitantes y más de un millón van a Barcelona, Madrid y Valencia. Del 1951 al 1960 Barcelona recibe 450.000 y Madrid 412.000. La población activa agraria que en 1940 representaba el 52%, en 1960 representa el 41,3% y en 1964, el 34,6%. Entre 1961 y 1969 mudan 3,5 millones de españoles básicamente hacia Cataluña, Madrid y País Vasco, y hacia Europa. Durante el Plan de Estabilización (59-63) emigra un millón.

Consumo

El ingreso per capita pasa de 362\$ en 1958 a 650\$ en 1968

	<i>1960</i>	<i>1970</i>
Coches por 1.000 h.	9	70
Teléfonos “	59	135
TV “	5	70

Recomposición del movimiento obrero.

Con el auge de la industrialización aparece un nuevo movimiento obrero. La clase obrera se ha extendido a nuevas zonas (Zaragoza, Pamplona, Valladolid); se trata de una población pobre, no especializada, con precariedad en la vivienda, en la sanidad,...; recién llegada (con lo que esto comporta tanto en el medio rural del que se sale como en el medio urbano al que se llega), poco concentrada en grandes empresas: en 1958 la mitad de los obreros trabaja en empresas de menos de 100 trabajadores, todavía en 1968 el 80% de las empresas emplean a 10 o menos trabajadores, las firmas de 50 a 500 trabajadores representan el 18% del total (mientras que, por ejemplo, en Gran Bretaña representan el 56% y en Francia el 46%); en 1960 el 63% de las empresas emplea de 1 a 5 trabajadores, las empresas de 100 a 500 trabajadores representan el 2,6% y dan empleo al 27% de la mano de obra, mientras que las mayores de 500 trabajadores, representan el 0,4% y emplean al 28%.

En 1958 aparece una nueva regulación de la negociación capital-trabajo (Ley de Convenios Colectivos) que trasladará la lucha anterior, más contra la administración, hacia la más directa obrero-empresario. Con el Plan de Estabilización (1959-63): bloqueo salarial, elevación de los tipos de interés, fijación del cambio, reforma tributaria y contención de la inflación, se da un aumento del paro y una drástica disminución salarial (50% al desaparecer pluses y horas extras). Con el inicio del auge económico (1962) empieza un ciclo de luchas por el salario y las condiciones de trabajo. No es pues el estado de atraso... lo que provoca la lucha sino el progreso industrial de estos años: la industrialización logra lo que la oposición política no lograba con sus proclamas a la huelga general, la unidad de los trabajadores y la acción de masas.

1962-66. El auge económico y la emigración masiva da al movimiento obrero una situación de fuerza: se rompen los topes salariales, aparecen formas autónomas de organización (comisiones obreras) que se erigen en protagonistas y ponen en bancarrota al sindicalismo vertical. Grandes huelgas y movilizaciones en el Norte y en Asturias que fuerzan un estado de excepción (mayo-agosto, 62). Se extienden las huelgas en Cataluña en solidaridad con Asturias (Maquinista).

1966-72. Continúan las grandes huelgas y su organización autónoma: 1966, Bandas Echeverri, 163 días de huelga; 1970, Harry Walker, 62 días de huelga; 1971, SEAT, huelga y lock-out. Luchas por los aumentos salariales, por las condiciones de trabajo, por los aumentos lineales, por los representantes elegidos y revocables. En el 66, las Comisiones Obreras presentan candidaturas para las elecciones sindicales y ganan; pero a continuación, durante los años 67-68 sus líderes son detenidos y las comisiones desmanteladas policialmente. En el 69 es proclamado el estado de excepción. En todo este período el Partido Comunista lleva una tarea de encuadramiento de las Comisiones Obreras que al final quedan bajo hegemonía comunista.

1972-77. Movimiento autónomo y asambleario. Fin del auge económico. A partir del 74 empiezan a notarse los efectos de la crisis energética (1972) sin que se tomen las medidas correctivas (devaluación, aumento precio energía,...) que el restablecimiento de las tasas de beneficio del capital necesita pero que no se atreve a plantear en un momento grave de vacío político y legislativo y de fuerza del movimiento autónomo y asambleario (pensemos que la Ley de Relaciones Laborales de abril del 76 contempla, en caso de despido improcedente, no el despido con indemnización sino la readmisión obligatoria, por ejemplo). Ante esta situación grave para la acumulación capitalista cierran filas todos los partidos que pactan (Pactos de la Moncloa, 1977: subordinación de los partidos a las necesidades de la acumulación) aumentos salariales siete puntos por debajo del índice de carestía, con el acuerdo de los sindicatos, que para tener más margen de maniobra no firman.

En los años 60 se opera pues en España una importante transformación en el aparato productivo y en la vida cotidiana de los españoles, en sus costumbres, en sus ideas, en sus formas de lucha. El capitalismo en España se ha modificado en profundidad bastando una transacción para pasar del régimen de dictadura con Franco al de la democracia actual. La lucha obrera y social que precipita la Transacción, es decir que es lo suficientemente fuerte para propiciar el Pacto, no es lo suficientemente fuerte para llevar más allá sus conquistas sociales conseguidas durante toda esta década. El Pacto y el recurso al terrorismo por parte de todos los partidos del Estado conseguirán el consenso necesario para llevar a cabo el conjunto de medidas que nos han llevado a la situación actual.

En apoyo de esa estrategia todos los partidos y los gobiernos se suman con fuerza a la cruzada antidroga, incorporando al Estado y a su recién estrenada democracia a la orquesta internacional de lucha contra la drogadicción, bajo la batuta de los intereses de EE.UU., mafias y cuerpos policiales. En pocos años, se desarrollan todas las potencialidades de este nuevo campo de actuación: incremento del control policial – especialmente sobre los jóvenes de las grandes ciudades– culpabilización a la sociedad mediante campañas de desinformación generalizadas, recuperación del principio de autoridad propio del moderno estado terapéutico (policía + médico) en su versión moralizadora y la utilización del mercado de la droga y las sustancias de alto riesgo como forma de desarticulación de los sectores más rebeldes a la transacción y de aquellos que, a medida que avanzan los proyectos de desmantelamiento industrial, van engrosando las filas de parados y llenando las bolsas de miseria de los centros urbanos.

Transición y Transacción. Algunas consideraciones sobre la vía española a la democracia

¿Transición o transacción? No, no se trata de un mero juego de palabras, porque hablando con propiedad, la llamada transición española a la democracia ha sido una operación transaccional entre los gestores de la oposición antifranquista y los administradores del franquismo tardío. Secreteo, intrigas de palacio, compadreo de reservado en restaurantes de lujo, chalaneo de sobremesa en los ágapes gentilmente ofrecidos por la embajada norteamericana a los jóvenes opositores y franquistas reformadores, movimientos en las sombras del viejo Borbón para salvar los muebles de la monarquía en la persona de su hijo, formado y designado por el general Franco para sucederle, blanqueo de camisas azules y decoloración de enseñas rojas, confidencias y exabruptos mezclados con abundantes golpes de mano en uno y otro bando, fueron urdiendo lo que se ha denominado un poco enfáticamente la Transición. El garito de las negociaciones se había abierto años antes, pero la voladura del delfín (Carrero Blanco) y la flebitis del Dictador en el verano de 1974 aceleraron el juego que en tantos rasgos y episodios se ha asemejado a una partida de tahures de la política.

Frecuentemente se presenta la Transición como una operación política amañada en las cancillerías de Washington, Bonn, París, etc., y en los foros de decisión de las firmas transnacionales (Trilateral). Por otro lado, como variante de esa interpretación, la transición democrática toma el aire de un pacto entre caballeros del antiguo régimen y los administradores de los aparatos políticos y sindicales de la Oposición, que se limitaron a ejecutar las órdenes emanadas desde los centros de decisión del capital transnacional. En ambos casos, los acontecimientos internos, la evolución de la inestabilidad social interior, la escala huelguística, etc., aparecen como aspectos meramente secundarios, sin influencia en la marcha de los pactos y negociaciones. Porque creemos que no fue exactamente así, y que la dinámica de las luchas obreras y las movilizaciones populares fue el

sobredeterminante de las decisiones adoptadas por quienes pasan por ser los artífices de la Transacción, es por lo que creemos justificadas estas páginas.

Sin embargo, la Transacción ha comportado una profunda transformación de la sociedad, de la estructura del Estado y del aparato productivo que viene a consumir y culminar el proceso de modernización y la plena integración del Estado Español en el orden económico europeo y mundial. No ha habido una transición, sino muchas transiciones que conciernen a todos los aspectos de la vida social, económica, ideológica, etc., de los súbditos de la monarquía democrática. Ha habido, pues, muchas transacciones, aunque la visión periodística del Pacto de la Transacción nos tienda a presentar ésta como el resultado de un pacto entre las personalidades de la Oposición y los franquistas reformistas, en la que las movilizaciones populares son sólo una referencia anecdótica que para nada interviene en la marcha de la negociación. En el desarrollo de los acontecimientos reales de la Transacción priman, por contra, los intereses de la cúpula militar, la neutralización del búnker de los franquistas irreductibles y la salvaguarda de la corona reinstaurada por Franco. Por supuesto, algo de verdad hay en ello, a juzgar por la facilidad con que los negociantes de la Transacción se pusieron de acuerdo y su capacidad para atajar el clima de agitación social e imponer la monarquía constitucional.

¿Cómo fue posible que la Transacción se llevara a cabo en la forma y con los resultados que conocemos, si parecía que el movimiento popular antifranquista apuntaba hacia otros derroteros? ¿Cómo se explica que de la noche a la mañana se cambiaran las consignas desde la ruptura democrática por medio de la huelga general, como venía propugnando el PCE desde que acabara la guerra, hacia el Pacto con los franquistas y la aceptación de la monarquía sin que, por ello, las fuerzas hegemónicas de la Oposición perdieran legitimidad entre las filas del antifranquismo y se vieran abandonadas de sus propias bases? ¿Por qué todo resultó tan modélicamente fácil para los administradores del Pacto Transaccional?

Estos y otros por qué son los que intentaremos abordar en las páginas que siguen. Y lo haremos, precisamente, tomando como referencia lo que en las abundantes –y redundantes– memorias, informes y análisis suele pasar desapercibido: el movimiento obrero y, en un sentido más amplio, las movilizaciones espontáneas y autoorganizadas de la contestación social antifranquista que no presentaban planteamientos de negociación inteligibles para el reformismo franquista y sus colaboradores de la Oposición (desde el PCE, PSOE, maoístas, etc., hasta los demócratacristianos).

Si la Transición fue posible, no se debió a la habilidad de las personalidades sino a la debilidad real del movimiento obrero y a la escasa relevancia de las tendencias anticapitalistas de las que se reclamaba una parte del m.o. que, sin embargo, se confundían con un antifranquismo cuya única aspiración se colmaba con el reconocimiento de las libertades formales. En este sentido, no hubo traición alguna de los aparatos administrativos de la Oposición antifranquista a cualquier aspiración popular que fuera más allá de lo que fue finalmente concedido en la transacción. Los cuadros gestores de la Oposición negociaron, como es natural, en función de sus intereses profesionales específicos –a saber, garantizar su supervivencia como grupo social de representación política y sindical en el marco del Estado monárquico constitucional– y su legitimación vino de la inhibición generalizada de las masas populares que aceptó las razones esgrimidas por los administradores de los aparatos políticos y las hizo suyas. Fue esa base de consenso sobre la que se urdió la Transacción a la medida de los gestores políticos del nuevo Estado democrático.

Afirmar que el m.o., como expresión específica de unos intereses de clase, o sea, las tendencias rupturistas o anticapitalistas del mismo, no fue capaz de hegemonizar, ni siquiera de mediatizar el proceso político-social de los últimos años del franquismo fue por su propia debilidad estructural. Una debilidad que hay que entender dentro del proceso de proletarianización de la población, de su evolución. Ahora bien, el justo dimensionamiento de las tendencias autónomas existentes desde unos años antes de la muerte del dictador y que persistieron hasta el inicio de la década de los ochenta, permite alcanzar algunas de las claves que en las crónicas y testimonios de la transacción son sistemáticamente marginadas. Que las movilizaciones autónomas de masas no hayan sido suficientemente relevantes como para evitar la transacción en los términos que se ha realizado, no quiere decir que su importancia haya sido nula. Al contrario, fue el elemento coadyuvante que precipitó el Pacto.

Se trata, pues, de elucidar en qué medida el trasfondo de ingobernabilidad que propiciaban los movimientos autónomos actuaba como catalizador en las maniobras de negociación de los aparatos político-sindicales en el sentido de forzar el pacto ante la cada vez más evidente y creciente amenaza

de perder hegemonía y legitimidad de los aparatos de la Oposición frente a una tendencia ascendente de la indisciplina laboral y social.

No es aventurado afirmar, en este sentido, que fueron esas tendencias autónomas, aún en su fragmentariedad y escasa consistencia, las que determinaron el acercamiento entre la oposición y los franquistas reformistas, una vez que el clima de ingobernabilidad que propiciaban las movilizaciones autónomas constituía una amenaza tendencial para una oposición que, encabezada por el PCE.CCOO, veía progresivamente como perdía capacidad para reconducir las movilizaciones, cuando tenía precisamente en su capacidad de control y gestión del movimiento obrero su baza para exigir su reconocimiento en la mesa de negociación. Los cambios tácticos de CCOO y del PCE en los años inmediatos a la muerte de Franco, que coinciden con los principales hitos de las tendencias autónomas dentro del movimiento obrero, son bien ilustrativos de lo que se acaba de decir.

Tampoco hay que sobrevalorar, la importancia de unas movilizaciones virulentas y proliferantes, pero que no se consolidaron en un movimiento propiamente dicho. Fue a causa de esta debilidad que la transacción fue posible. La paradoja consistía en que a medida que los movimientos autónomos se extendían, el desplazamiento hacia posiciones pactistas por parte del PCE eran más ostensibles. La autonomía obrera expresada en las dinámicas asamblearias confrontaba al PCE –y, por extensión, al conjunto de la Oposición– con sus propias limitaciones y posibilidades de articular el m.o. en torno a las CCOO. Pero curiosamente, esas fuerzas centrífugas de la autonomía obrera en lugar de provocar una desviación del PCE hacia la izquierda con el fin de recuperar una cierta legitimidad entre la clase trabajadora y reforzar su propia posición negociadora, tuvo unos efectos contrarios.

El PCE, ante la presencia de las tendencias autónomas y otras expresiones comunistas que ponían en entredicho su hegemonía formal sobre el movimiento antifranquista, optó por combatirlos al tiempo que basculaba sus posiciones hacia el Pacto con los franquistas. En este sentido, el PCE, con su descarada lección de oportunismo, no hacía nada nuevo. Tradicionalmente, los partidos comunistas, cuando los términos de la lucha de clases generaba una presión desde la izquierda, siempre han tenido mayores facilidades para entenderse con la derecha que con las tendencias proletarias de izquierda. En toda Europa no han hecho otra cosa a lo largo de este siglo; y en España, durante la II República, también hicieron lo mismo.

Ni siquiera fue posible que se entablara un verdadero debate en el seno de la izquierda antifranquista a la luz de las tendencias autónomas. A ellas se respondió con los clichés y anatemas heredados de los años veinte y la autonomía en su propia debilidad e inmadurez fue incapaz de imponer sus tesis, ni siquiera en el terreno de las ideas políticas circulantes entonces. En fin, lo que hubiera podido ser un debate político quedó en polémica estéril por la escasa consistencia de unos (m. autónomo) y la excesiva madurez de otros (izquierda antifranquista), aunque en este caso cabría hablar más bien de obsolescencia política de unos aparatos anclados en la ideología del estalinismo tardío travestido en eurocomunismo. Lo mismo puede imputarse a los grupos a la izquierda del PCE que mimetizaron el oportunismo de los estalinistas y renunciaron a la ruptura, una vez que aquél había hecho al salto hacia la reforma. No obstante, todos ellos, en la medida de sus posibilidades contribuyeron a aislar y silenciar las tendencias del m.o.

Claro que tampoco hay que magnificar la amplitud y profundidad de la oposición a la Dictadura. La actividad antifranquista se concentraba en torno a algunos núcleos de las áreas de nueva industrialización (producto de la política desarrollista de los sesenta) y en las zonas tradicionales que, sin embargo, fueron duramente castigadas por la represión de postguerra. La tradición de clase había quedado interrumpida en 1939. La guerra supuso el exterminio físico de una base proletaria activa que sufrió en las durísimas condiciones de postguerra una sistemática labor de desgaste. La oposición antifranquista se nutría fundamentalmente de una nueva generación de proletariado surgida al calor del desarrollismo y de ciertos sectores universitarios. La precariedad del movimiento obrero tenía su reflejo en todos los órdenes cuantitativos y cualitativos.

Un m.o. escasamente desarrollado y con una subjetividad de reciente formación (una clase trabajadora joven, salida del desarraigo agrícola), es fácilmente permeable a las corrientes del marxismo ideológico también menos evolucionadas. No es extraño que, en ese panorama y con una base proletaria desconectada por treinta años de vacío de la experiencia de la lucha de clases, el estalinismo tardío del PCE y los “ismos” derivados de la lectura de Lenin se erijan en horizonte teórico del m.o.

También hay que tomar en consideración el hecho de que el desarrollismo franquista, gracias a la favorable coyuntura internacional, había conseguido una mejora de las condiciones de vida del proletariado. Los años sesenta son la era de la especulación inmobiliaria galopante, pero también de la oferta de las viviendas de pacotilla en propiedad, de las horas extraordinarias (mal pagadas, pero abundantes), de la exportación de la mano de obra excedente (que revertía en afluencia de los ahorros de los emigrantes), del seiscientos, los electrodomésticos y del despegue del consumo. Eso creó una base social fiel al régimen franquista. No activamente fiel, no fascista, pero que tampoco presentaba problemas de tensión política.

“Vivir sin meterse en política” era la consigna del franquismo que penetró profundamente en la conciencia de los españoles. Esa inhibición generalizada, ese dejar hacer, fue la base real que mantuvo la Dictadura franquista. Y esa fue la rémora que no pudo vencer el sacrificado activismo de los militantes contra la Dictadura. Solo cuando se hacía evidente el cambio (por la inminencia de la muerte del dictador y, sobre todo, después del atentado que acabó con su delfín, Carrero Blanco) se extendió entre la población una expectativa de cambio que, en una relativa proporción, se tradujo en un engrosamiento de las filas activas del antifranquismo. Pero, si miramos hacia atrás críticamente, una vez disipado el optimismo activista en que nos veíamos envueltos durante esos años, podremos darnos cuenta de la justa dimensión de las movilizaciones de la oposición antifranquista (pactista, como de la rupturista y autónoma).

La despolitización de la mayor parte de la población española está en la raíz de su mantenimiento en un segundo plano durante la Transición. Acostumbrada a no meterse en política, también en esa ocasión dejaron hacer. O, dicho de otro modo, fue la politización inducida desde los aparatos ideológicos de la izquierda la que generó esa nueva forma de inhibicionismo generalizado respecto a los asuntos públicos que caracteriza los sistemas democráticos. Que la mayor parte de la población asalariada votara socialista en 1982 no quería decir que de repente se había despertado una conciencia de izquierda, sino que respondía más bien al acoso ideológico que asociaba la idea de modernidad a la democracia y a la integración en Europa.

La penetración de inversiones extranjeras ya operaba en cierta medida la integración en la cadena fordista que era necesario complementar con la adecuación político-ideológica. Europa era la garantía de futuro, modernidad y progreso. El PSOE encarnaba la promesa de que los españoles se sacudirían definitivamente el pelo de la dehesa y tendrían la oportunidad de ser europeos. Para entonces, Europa ya no era en el imaginario de los españoles la fuerza demoníaca del liberalismo que denostara el Caudillo reiteradamente en sus discursos, sino el sugerente escaparate del supermercado.

Las maniobras pactistas fueron posibles porque el m.o. era débil, y las tendencias autónomas igualmente inmaduras (incipientes) y dispersas. No conviene olvidar que aquí jamás estuvo el poder en la calle, como ocurriera durante los meses que siguieron a la revolución de los militares portugueses. Esa debilidad estructural explica que las tendencias autónomas no fueran capaces de resistir la normalización democrática y se disiparan a lo largo de la Transición, sin una especial represión, al revés de lo que ocurriera en Alemania en 1919 o en España en 1936. La falta de consolidación de un movimiento autónomo, que no quiere decir exactamente una forma organizativa o institucional, es lo que determinó su desaparición; eso sí, con algunas notables resistencias (Euskalduna, Gijón, etc.). Pero para entonces, los movimientos autónomos, ya asentada la normalidad democrática, habían dejado de ser una causa de desestabilización económica y política para convertirse en problemas de orden público.

El ciclo 1974-77: periodo álgido de las luchas autónomas

El periodo comprendido entre 1974 y 1977 hay que considerarlo como el momento en que la masa proletaria comenzaba a constituirse como clase, es decir, como entidad autónoma, y con intereses específicos, respecto a los aparatos de representación de la Dictadura y de la oposición democrática interclasista (Junta Democrática y Plataforma). Fue ese un proceso de corta duración que no llegó a consolidarse más allá de la virulencia de las movilizaciones.

La tradición práctica leninista ha configurado el concepto de dictadura del proletariado como mera dictadura del partido (que se arroga la representación del proletariado). Sin embargo, durante esos tres años de movilizaciones autónomas se verificó en muchos de los puntos de conflictividad una real dictadura del proletariado. Es decir, la dictadura de la clase obrera que impone su

reconocimiento práctico ante el capital. La indisciplina laboral, el desbordamiento de los límites reivindicativos por medio de incrementos salariales que, al intentar ser reabsorbidos a través de la inflación (1), desestabilizaban el equilibrio económico-financiero, además de una determinada correlación de fuerzas favorable a los trabajadores en muchas movilizaciones que permitía imponer una dinámica de asambleas que comportaba, a su vez, la supresión práctica de la legalidad imperante, etc., son algunos de los aspectos que caracterizan esa forma de dictadura del proletariado que ejercen los trabajadores desde la afirmación unilateral de su condición asalariada.

Propiamente dicha, esta es la única forma de dictadura del proletariado posible; a saber: la que ejerce la clase obrera en tanto sujeto asalariado, que es tanto como decir, en tanto fuerza de trabajo sometida al capital. La clase obrera se autonomiza, así, frente al capital al que, por otra parte, aún reconoce como interlocutor del cual obtener sus reivindicaciones.

El inicio de la década de los setenta se caracteriza por un aumento continuado de la conflictividad laboral que se traduce en una fuerte presión salarial y en un clima de inestabilidad social que socava la consistencia del Régimen franquista. La propia naturaleza de la Dictadura, al criminalizar y demonizar como productos de las fuerzas oscuras del comunismo y la masonería, lo que no eran sino, en su mayor parte, luchas reivindicativas de carácter salarial, estaba contribuyendo a darles una dimensión política que no se ajustaba con la realidad.

Durante ese periodo la iniciativa corresponde a la parte más activa de la población asalariada. Ella protagoniza las movilizaciones. No sólo el aparato represivo del Régimen se ve desbordado por el número y amplitud de las huelgas y movilizaciones de la clase trabajadora, sino que sus repercusiones se dejan sentir, sobre todo, en la estructura productiva (2). A lo largo de esos años y hasta la firma del pacto de La Moncloa (1977), la productividad va por detrás de los incrementos salariales. La apropiación de una parte creciente de la riqueza social por la clase trabajadora va en detrimento del proceso de acumulación de capital. Ahí radica el factor fundamental que precipitaría a las fracciones más dinámicas del capital autóctono y transnacional a acelerar sus presiones sobre el aparato franquista. Las razones formalistas, referidas a la falta de un régimen nominal de libertades, al estilo democrático, que retrasaban la incorporación del Estado Español a la Comunidad Europea encontraban en la acción desestabilizadora de los movimientos de masas su razón más profunda.

El ciclo de huelgas de los años sesenta se había consolidado en una relativa madurez del movimiento obrero, que en los años setenta amenazaba convertirse en una fuerza desbordante de las previsiones establecidas para una transición “no traumática”. No porque el m.o. entrañara un proyecto de clase, revolucionario o transformación radical de la sociedad, sino porque su propia acción, creciente e indisciplinada (huelgas autónomas), se había convertido en un factor de desestabilización que incidía directa y negativamente sobre los beneficios del capital.

La función de la Dictadura como garante de las condiciones represivas que hicieron posible la acumulación de capital en España desde el final de la Guerra Civil hasta el comienzo de los años sesenta, y que había favorecido la penetración del capital extranjero, ya había culminado su misión histórica. En ese momento, las mismas fracciones del capital que se había beneficiado de las condiciones creadas por la Dictadura exigían el inicio de un nuevo ciclo histórico, en el que el cambio político se contemplaba como una necesidad inexcusable, toda vez que se ponía de manifiesto la incapacidad de la Dictadura para mantener el orden social y productivo.

Es en este contexto donde se inscriben las intensas maniobras aperturistas, reformistas, etc., que desde el propio Régimen intentan un maquillaje (Espíritu del 12 de Febrero de 1974) que pretenden cambiar algo para que todo siga igual, o bien abrir una vía de diálogo con la Oposición, que sería a la postre la opción (reformista) viable para el reciclaje democrático del franquismo residual. También la representación política del capital extranjero, principalmente la francesa y estadounidense, conspiraba y mediaba entre el Régimen y la Oposición para hacer más controlable el cambio.

Durante ese tiempo se evidenciaron también dos aspectos contradictorios en el seno del m.o. De un lado, la hegemonía del PCE y las CCOO, con una incuestionable capacidad de movilización laboral y social; y del otro, las tendencias centrífugas dentro del propio movimiento de masas que representan rupturas puntuales e indisciplinas respecto a las directrices políticas y prácticas emanadas de la dirección comunista.

Ahí estribaban las dificultades del PCE-CCOO para controlar el movimiento de masas. O mejor dicho, los movimientos (espontáneos, autónomos e incontrolados) que sus propias convocatorias de movilización propiciaban. En cierto modo, estaban atrapados entre su innegable capacidad de

convocatoria y su capacidad real para hegemonizar los movimientos. La carta que podía jugar el PCE en su negociación con los franquistas reformistas era la de su capacidad de movilización. El PCE tenía que demostrar que el futuro Estado democrático tenía que contar necesariamente con él. Pero, por otro lado, la necesidad de hacer alardes de movilización que convenciera a los franquistas recalcitrantes de la necesidad de sentarse a negociar el postfranquismo con los administradores del PCE, comportaba un desgaste político del partido y del sindicato, que veían cómo se les iban de las manos los conflictos. Tenían capacidad para decidir cuándo se iniciaba el conflicto, pero no para decidir cuándo finalizaba.

El ascenso de movimientos que se escapaban al control del PCE fue la razón que precipitó la convergencia de intereses entre los sectores reformistas del aparato franquista, del capital democrático y de los antifranquistas, encabezados por el tándem PCE-CCOO. Con la muerte de Franco —y la intensificación de la indisciplina obrera— se volvía más urgente para unos y otros urdir el pacto.

Indisciplina laboral, ingobernabilidad social e imprevisibilidad del proceso de acumulación marcan esos años de autoorganización de la fuerza de trabajo en toda una serie de movilizaciones obrera (3) que perturbaban y hasta podrían imposibilitar, de no ponerse coto a tiempo, el Pacto de Transición consensuado por los franquistas reformistas y la Oposición.

Expectativas y decepciones

La facilidad con que prendía el movimiento reivindicativo y la acción militante de pequeños núcleos radicales era lo que nos daba, entonces, una visión sobredimensionada de los planteamientos anticapitalistas realmente existentes en las movilizaciones autónomas. La perspectiva y el análisis de su evolución es lo que nos lleva a corregir algunas de nuestras apreciaciones de entonces, demasiado mediatizadas por la inmediatez de la intervención militante y las posibilidades abiertas por la descomposición evidente del aparato de Estado de la Dictadura.

El clima de esos años estaba fuertemente impregnado por la inminencia de un cambio político que, necesariamente, habría de producirse a la muerte del dictador. Las disensiones dentro del propio aparato de poder entre falangistas de diverso pelaje, opusdeistas, franquistas reformistas y toda suerte de oportunistas que medraron al calor de la Dictadura, revelaban las dificultades del continuismo. Por otro lado, la brisa del mayo del 68, el otoño caliente italiano, la caída de la dictadura de Marcelo Caetano en Portugal y la muerte de Franco alentaron esas perspectivas de cambio. Para entonces, franquistas reformistas, empresarios y oposición ya estaban de acuerdo en que había que frenar a toda costa la escalada de huelgas autónomas (salvajes en la jerga periodística) (4).

En aquel contexto parecía que era posible casi todo. El activismo de un puñado de militantes podía ser determinante de movilizaciones masivas. Era una coyuntura de indudables expectativas de cambio. Eso era algo que había calado profundamente en el imaginario colectivo de la población asalariada. Además, la propia experiencia de los años recientes así parecía confirmarlo. El ciclo huelguístico, desde finales de los sesenta, ponía de manifiesto la creciente pérdida del control sobre la situación social por parte de la Dictadura. La desafección hacia el Régimen no se disimulaba ni siquiera entre la clase media y la burguesía. Sin embargo, que Franco muriese en la cama, representaba igualmente una frustración histórica para la izquierda político-sindical.

La manera como acabó el régimen franquista significa el fracaso real de cuarenta años de antifranquismo. El hecho mismo de no haber sido capaces de expulsar al dictador revelaba la debilidad real de la Oposición. Sin embargo, entre las capas más jóvenes de la población asalariada, de reciente incorporación al entramado industrial alentado por el desarrollismo, desconectados —para bien y para mal— de la tradición antifranquista de postguerra, la experiencia de los movimientos huelguísticos abría expectativas que no es que estuvieran a la izquierda o a la derecha de los planteamientos de la izquierda histórica (PCE, PSOE, CNT), sino fuera de la lógica imperante en la intervención de aquélla.

1. La inflación en 1977 fue del 25%, la más alta de todos los países industrializados.

2. Las reivindicaciones sociales unen a las políticas, a la exigencia de amnistía y libertad, lo que siempre generaba enfrentamientos con la policía, organismo represor directo en la Dictadura franquista.

3. Luchas autónomas en la transición democrática. Colectivo Editorial ZERO. Bilbao. Tomo I. Ruptura contra Reforma 12 noviembre/75 - 12 noviembre/76. Tomo II. A remolque de la Reforma 12Nov/76 - 15 junio/77

4. Cualquiera que repase la hemeroteca encontrará abundantes ejemplos de todo esto en todos los rincones del Estado Español. Dos casos representativos los tenemos en las vicisitudes del FOC y la guerra de desgaste llevada a cabo desde las CCOO contra las tendencias anticapitalistas en el área industrial de Barcelona, o las maniobras de la COS contra la coordinadora de asambleas de Vizcaya.

Vitoria 76 y el cambio de la estrategia sindical

Dentro de esa escalada de movilizaciones autonómicas (1974-77) se llega a la huelga general de Vitoria, que se saldó con una brutal represión policial (tres muertos y decenas de heridos) (1). Los contactos entre los franquistas reformistas y la oposición no impedía que la represión policial sobre el m.o. continuase con igual ferocidad que en las etapas anteriores, hasta el punto que uno de los franquistas reformistas, Manuel Fraga, ministro con Franco y ministro del Interior en marzo de 1976, acometiera la solución del conflicto de Vitoria de la manera a como la Dictadura nos tenía acostumbrados. La carnicería de Vitoria, sin embargo, no tuvo ninguna repercusión relevante sobre los aparatos políticos que negociaban la Transición. Continuaron las conversaciones y los tira y afloja para ajustar los términos del Pacto, como si nada hubiera pasado. De hecho, Vitoria 76 marca un punto de inflexión en la precaria historia de las movilizaciones autónomas y en la consideración que, en adelante, les merecería a los aparatos políticos y sindicales cualquier iniciativa autónoma de los trabajadores.

Vitoria fue la lección sangrienta que daba el Gobierno tardofranquista con la aquiescencia de la Oposición, a una clase obrera que amenazaba con desbordar los términos en que se estaba diseñando el recambio político de la Dictadura. Todos los integrantes del pacto estaban de acuerdo en que había que normalizar la situación social cuanto antes. A partir de esa fecha, se redoblan los esfuerzos de sabotaje de los sindicalistas contra el movimiento asambleario y desde la prensa se lanza una ofensiva publicitaria tendente a criminalizar los movimientos autónomos en las fábricas.

Si Vitoria había contribuido a decantar la posición de los sindicatos (CCOO y UGT) contra las tendencias autónomas, después de la jornada de huelga del 12 de noviembre del mismo año, en el que ambas centrales se unieron en un organismo conjunto (COS), será cuando los sindicatos se esfuerzan especialmente por demostrar su capacidad de control y gestión del m.o. Para entonces el pacto político ya estaba muy avanzado y los sindicatos tenían la función y el compromiso de desactivar el m.o., condición indispensable para la viabilidad del pacto y reconducir la crisis de beneficios del capital. En realidad los beneficios acumulados durante la década precedente estaban siendo fuertemente erosionados por las movilizaciones obreras de los 70.

Después de Vitoria, los sindicatos (CCOO, UGT, ELA-STV y USO) se consagran a la desarticulación sistemática de las expresiones autoorganizativas que surgen del m.o., de manera que en el segundo trimestre de 1976, a continuación de la represión de Vitoria, desciende la conflictividad de manera ostensible. Es así como se llega a la jornada de huelga sindical del 12 de noviembre en la que los sindicatos (y a través de ellos la oposición) trata de demostrar a Suárez su capacidad de control sobre las movilizaciones obreras. Cabe suponer que después de esa fecha la posición negociadora de la oposición subiría unos cuantos enteros. Desde ese momento, los sindicatos renuncian a la movilización para concentrarse en el fortalecimiento de sus estructuras en los centros de trabajo. El abandono de la movilización coincide con la nueva orientación tendente a ganar afiliados y a distraer a las asambleas con la polémica en torno a la unidad/pluralidad sindical.

La aniquilación de Vitoria no era sólo un acto más de la brutalidad policial franquista, sino el restablecimiento del principio de autoridad política del Estado en su condición de salvaguarda del orden económico capitalista. En cierto modo, Vitoria representaba la culminación del movimiento asambleario, dinámica autoorganizativa en la que los trabajadores se constituían como clase antagonica en ruptura práctica con la legalidad no sólo de la Dictadura, sino del sistema de representación democrático burgués. Ese era el peligroso contenido de fondo que Oposición y franquistas se apresuraron a eliminar sin escatimar esfuerzos. Además, la asamblea representaba una expresión de rupturismo obrero, de ruptura práctica desde el proletariado que se insubordinaba contra el decreto de congelación salarial de octubre de 1975, por ejemplo, con unas acciones en las que la clase obrera luchaba por imponer desde sí misma y con sus propios medios los aumentos salariales. Por contra, la táctica reformista de la oposición y los sindicatos nunca presentó una opción rupturista sino, al contrario, una táctica continuista que buscaba mediaciones, a través de las

visitas al obispado, las comisiones de negociación con el gobernador civil, etc., que, a la postre, constituían un medio de legitimación de la autoridad franquista.

Dentro del m.o., salvo en las incipientes y fragmentarias movilizaciones autónomas, no se dieron expresiones rupturistas, pues el m.o. hegemonizado por el PCE y su correa de transmisión CCOO, con su práctica entrinista dentro de la CNS, lo que había propiciado era una especie de reconversión de los jurados de empresa franquistas en representantes sindicales de los comités de empresa de la democracia. De manera que puede decirse que, al igual que sucediera con el resto de instituciones de la Dictadura, en lo que se refiere al ámbito sindical no hubo propiamente una ruptura, sino continuismo que se fue transformando desde dentro hasta la sustitución de la CNS por la estructura de los sindicatos democráticos, en un proceso paralelo al descrédito creciente de la CNS y su abandono de hecho por parte de los trabajadores.

Contradicciones y debilidades de la autonomía

La debilidad de las tendencias rupturistas en el m.o. no pudieron evitar que se llevara a cabo la Transacción y el Pacto. A decir verdad, la alternativa rupturista (que indujera, por ejemplo, la instauración de la III República), –y aún más la ruptura anticapitalista– en ningún momento se presentó como una opción consistente, ni siquiera en las movilizaciones autónomas, más allá de la voluntad militante de los grupos activistas.

La indudable expectativa de cambio político era lo que hacía posible que el discurso rupturista y anticapitalista encontrara cierta audiencia en algunos segmentos del m.o.; pero hemos de reconocer que en ningún momento fue un sentimiento mayoritario, ni siquiera en el ámbito de las movilizaciones autónomas.

El m.o., en su mayoría, no estaba dispuesto a ir más allá de las concesiones democráticas que los negociantes de la transacción estaban dispuesto a conceder. Y las circunstancias en las que se ha desarrollado aquélla a lo largo de la década de los 80 así parece demostrarlo. Incluso hay que reconocer que la politización del m.o. autónomo fue relativamente baja. El movimiento asambleario, como el conjunto del m.o., se había manifestado fundamentalmente como un movimiento sindical (salarial reivindicativo) pero no alcanzó el suficiente grado de madurez como para generar desde sí mismo una plataforma política distinta a la que defendían los sindicatos.

Sólo en el País Vasco las huelgas autónomas adquirieron un relativo carácter político (Huelga General por la amnistía en Vizcaya, por ejemplo). Pero en líneas generales, la politización del m.o. hasta las elecciones de junio de 1977 se limitaba a plantear la liberación de los detenidos durante los procesos huelguísticos y a defender los derechos de libre reunión, asociación y expresión. De todos modos, es necesario superar una visión simplista y formalista de la importancia política de las luchas autónomas. La influencia política de éstas se revelaba de forma indirecta; precisamente, en las maniobras de los aparatos políticos-sindicales y en el agravamiento de las condiciones de la acumulación de capital.

Con todo, no fueron solamente las maniobras político-sindicales las que acabaron con las tendencias autónomas del m.o., sino las propias contradicciones de éstas últimas. La incapacidad de las movilizaciones autónomas para superar las limitaciones de las luchas hasta configurar un movimiento autónomo, propiamente dicho. Fue esa incapacidad, por ejemplo, la que hizo posible que el gobierno civil de Barcelona resolviera el conflicto de los trabajadores portuarios de un plumazo, con intromisión en las competencias de la delegación de trabajo, una vez que se habían dado los primeros pasos hacia una coordinación de las luchas entre los estibadores de Barcelona y los obreros de Roca, durante la larga huelga de éstos últimos.

En el otro extremo, tendríamos el caso de Fasa-Renault (Valladolid), donde la mayoría de delegados asamblearios que copaban el comité de empresa, víctimas de sus propias contradicciones internas y de su incapacidad para intentar siquiera la consolidación de un movimiento en conexión con otros centros de agitación autónoma, vieron cómo se iba desmembrando el movimiento de las asambleas hasta que los sindicatos se hicieron con las riendas de la representación obrera. Similar perplejidad ante el propio poder asambleario puede encontrarse en la experiencia de otras fábricas (p.ej., Roca) (2).

Desde luego, la tarea de recuperación del m.o. mediante la desarticulación de las tendencias autónomas, no fue fácil para los sindicatos dada la importancia y el arraigo que, en muchos casos, existía de la conciencia asamblearia. Por eso las CCOO, que habían surgido de un movimiento de base, asambleario, en las minas asturianas, enseguida fue visto como la posibilidad del PCE para

ganar influencia entre las filas obreras y llegar así a constituir el fundamento de su sindicato (CCOO). De hecho, las CCOO fueron el resultado de la recuperación sindical por parte de los militantes comunistas de la tendencia espontánea y asamblearia de las primeras comisiones obreras de base. La formación de las primeras comisiones obreras fueron una realidad espontánea de la base trabajadora, y sólo en un segundo momento, una vez controladas por el PCE y con el descrédito extendido de la CNS entre los trabajadores, se perfilaron como una estructura de encuadramiento alternativa a la oficial, cuya consolidación en el periodo de transición democrática se basaría precisamente en combatir y anular cualquier expresión autónoma, de base.

1. Policías antidisturbios, que se habían ido concentrando en Vitoria, procedentes de varias provincias, cargaron con gases lacrimógenos contra más de un millar de trabajadores encerrados en una iglesia, a los que ametrallaron en el momento de abandonar el edificio.

2. Ver Luchas autónomas en la transición democrática. Colectivo Editorial ZERO, Tomo II

Tendencias autónomas: una aproximación a la autonomía obrera

Si hablamos con rigor, hay que reconocer que no hubo un movimiento autónomo propiamente dicho. Hubo, eso sí, numerosas expresiones autónomas, traducidas en huelgas que superaban los términos sindicales no tanto en sus reivindicaciones (salariales y laborales), como en su práctica asamblearia, autónoma. Con todo, esas movilizaciones autónomas no llegaron a fraguar en un movimiento ni siquiera incipiente. Todas ellas se inscriben en una misma constelación caracterizada por su rechazo de la representación sindical (oficial y de los sindicatos opositores) y el emprendimiento de acciones desde la expresión básica de la democracia directa (asamblea). Pero entre ellas no hubo, más allá de algunas manifestaciones de solidaridad más o menos extendidas (huelga de Roca, por ejemplo), la coordinación mínima necesaria para que el ciclo de las huelgas autónomas pudiera configurar un movimiento.

Las razones por las que las huelgas autónomas no se consolidaron y, en consecuencia, fueron fácilmente yuguladas por las burocracias sindicales desde el seno mismo de las empresas, habría que buscarla en la propia naturaleza del proletariado que animaba los procesos de lucha autónoma. Por un lado, los elementos más activos de la autonomía provenían de los medios proletarios que habían roto política y prácticamente con la izquierda antifranquista, habiéndose configurado como una tendencia anticapitalista. Pero eran núcleos sin ninguna tradición en la historia española, pobre donde las haya en cuanto a la producción teórica revolucionaria o de desarrollo del pensamiento crítico. Además, la única tradición de cultura proletaria, generada en torno a los ateneos y casas del pueblo, había desaparecido con la derrota de la clase obrera en 1939.

Se trataba, pues, de avanzadillas proletarias nutridas de una tradición fragmentaria y casi siempre proveniente de las experiencias históricas de la izquierda comunista alemana del periodo de entreguerras y, más recientemente, de la autonomía obrera italiana. Su experiencia práctica, no obstante, tomaba como referencia el breve periodo del ciclo de luchas proletarias que había impulsado su ruptura con los aparatos del antifranquismo histórico. Ni siquiera puede decirse que como cultura política llegase a tener un cierto arraigo entre las masas proletarias. El terreno de acción, sin embargo, era el de un proletariado en fase de adaptación, recientemente desarraigado del campo. Proletariado de primera generación y, en los más jóvenes, con una experiencia de vida industrial que se limitaba a cinco o diez años.

La indisciplina laboral en estos casos no provenía tanto de la superación histórica de la práctica sindical, como de un rechazo o resistencia a su adaptación a las formas de explotación de la fuerza de trabajo industrial, que llevan parejo el encuadramiento sindical. En cierto modo, el rechazo del sindicalismo entre la mayor parte de los trabajadores era por defecto y no tanto en base a una experiencia propia, reflexionada y contrastada a la luz de las prácticas proletarias de otros países, como hacían los grupos militantes activos.

Si la transición fue, en realidad, una transacción entre los aparatos gestores de la Oposición antifranquista y los franquistas tardíos fue precisamente porque nadie estaba en condiciones de impedirlo. Y al decir nadie, hay que referirse a la izquierda rupturista o revolucionaria, en general, y a los movimientos autónomos en particular. Fue la debilidad real de la autonomía obrera, a pesar de su virulenta irrupción en los primeros años de la década de los setenta, lo que permitió a los aparatos político-sindicales pactar, del mismo modo que la debilidad de la Oposición antifranquista

aceleraba, a su vez, la cadena de claudicaciones que le llevó de la Ruptura Democrática al Pacto de Reconciliación Nacional.

No cabe duda que esos años representaron también una oportunidad perdida en lo que a la introducción de las nuevas ideas y expresiones prácticas que, con mejor o peor fortuna, aportaban los movimientos autónomos. Estos representaban una corriente de modernidad tanto en los referentes teóricos, como prácticos, que recuperaba toda la tradición reciente de la lucha de clases, así como la reconducción crítica de experiencias y tradiciones de la cultura proletaria vinculadas al marxismo y anarquismo. Una oportunidad, en fin, para salir de la raquíta producción teórica que caracteriza el movimiento obrero hispánico y de la cual, en su vertiente marxista, la torpe retórica del PCE se había erigido en baluarte.

El PCE, cuyas cotas de creatividad no daban más que para pasar del jacobinismo leninista al institucionalismo eurocomunista, se convertía de ese modo en un agente activo a la hora de impedir el desarrollo de un debate que rompiera el miserable marco de teorización del estalinismo tardío del que era depositario. Un debate que se nutriera con las aportaciones que, heredadas del movimiento comunista (consejismo, nueva izquierda posterior a la segunda guerra mundial, etc.) introdujeran nuevas perspectivas en la tradición del pensamiento marxiano revolucionario. Las movilizaciones autónomas fueron el espacio abierto en el que se iniciara ese debate y ese movimiento que no pudo ser.

No pudo ser por la propia debilidad estructural de la autonomía obrera en la composición de la izquierda. La reconducción del antifranquismo hacia el anticapitalismo se revelaba como una posibilidad viable en las luchas de fábrica, pero era inviable frente al Pacto de Transición. Las movilizaciones autónomas podían actuar como catalizador a la hora de precipitar el Pacto, pero no fueron capaces de imponer sus propias condiciones al Pacto, sobre la base de unas mínimas claudicaciones, frente al cambio democrático.

El maximalismo de las consignas anticapitalistas que aparecían en los movimientos autónomos enmascaraban, en realidad, su incapacidad para realizar la ruptura con el franquismo tardío. En la componenda de la Transición, los aparatos negociadores podían prescindir tanto de la presencia física (el movimiento no tenía una entidad, era eminentemente una práctica), como de sus reivindicaciones. Los movimientos autónomos en esos años no contaban con la misma correlación de fuerzas que tenían los anarcosindicalistas durante la II República, cuando “se podía gobernar sin la CNT-FAI, pero no contra ella”. Ahí radica la diferencia fundamental entre ambas situaciones y la demostración de la debilidad objetiva de los movimientos autónomos. Su debilidad subjetiva es la que proviene de su radicalización formal mediante prácticas antisindicales por parte de una masa proletarizada a marchas forzadas y sin la tradición y disciplina que caracteriza el encuadramiento sindical.

La hegemonización del Pacto

Un cambio táctico sustancial se produce después de noviembre de 1976. En cierto modo fue la última representación del aparato estalinista para hacer valer sus derechos en la negociación de la Transición, para evitar dudas acerca de su importancia en la Oposición y atajar las posibles intenciones oportunistas de algunos opositores que abrigaran la idea de negociar con los franquistas, dejando al margen al PCE. Hay que tener en cuenta que para entonces, la UGT había sido fuertemente potenciada con la ayuda de la Internacional Socialista, al igual que el PSOE, y contaba con mayor permisividad para sus actividades por parte del aparato tardofranquista.

Todos, Oposición y herederos del aparato franquista, estaban interesados en alcanzar un acuerdo. Todos dan pasos hacia el mutuo encuentro, los franquistas reformistas, intrigando en los cenáculos del Régimen para neutralizar definitivamente a sus congéneres más descabellados (los detritus del falangismo, del delirio imperial y la revolución nacionalsindicalista pendiente). De hecho, ya habían sido barridos de las esferas del poder con el ascenso del Opus Dei, y su influencia en la formación social española era nula, aunque conservaban ciertas prebendas e influencias en los cuerpos directamente represivos. Sin embargo, fueron limpiamente desplazados por los avispados franquistas en la negociación del postfranquismo.

La influencia de los Ultras estaba reducida a algunos núcleos nostálgicos de la autarquía, sustentados por la fracción del capital (tarrateniente y comercial) directamente vinculada al trato de

favor dispensado por el franquismo, pero que no había sabido evolucionar hacia planteamientos políticos y productivos. Bien asentados en el aparato policial (falangistas) y en el Ejército (militares franquistas), sus maniobras desestabilizadoras quedaron limitadas al terrorismo y al asesinato de militantes izquierdistas.

Los atentados y asesinatos fascistas fueron utilizados por sus hasta hacía bien poco camaradas para jugar con el fantasma de la involución y presionar a la Oposición para el Pacto. Los franquistas pactistas aparecían, así, como fuerzas progresistas que ocultaban su origen y naturaleza gracias a la maniobra propagandística que colocaba la etiqueta de franquistas a los segmentos más violentos, y políticamente más obtusos, generados por la Dictadura.

Por otro lado, el compromiso de los reformistas se extendía a conseguir la neutralidad del Ejército en el Pacto de Transición. El rey, que había jurado los Principios Fundamentales del Movimiento y era el legítimo heredero del general Franco –al fin y al cabo había sido nombrado por él– se encargaría de ir a hacer bolos por los cuarteles militares, entre cuyos mandos contaba con un amplio prestigio. Calmar los sables y hacerles entender que todos sus privilegios les serían garantizados en el nuevo régimen democrático y que participarían en nuevas oportunidades profesionales, gracias a la integración en la OTAN: ese fue el mérito de los franquistas reciclados en demócratas.

Que los militares estaban neutralizados ya en la primavera de 1977 lo puso de manifiesto el documento de los generales (Milans del Bosch, a la cabeza) en la que se pronunciaban contra la legalización del PCE. Ese hecho demuestra que a los militares el proceso se les había ido de las manos, bien por inhibición de la mayor parte de la cúpula militar, que se había dado cuenta que su situación en nada iba a cambiar, sino para legitimarse en el nuevo régimen democrático, bien porque a consecuencia de lo anterior, los militares que aún alentaban una solución “a la turca” habían quedado definitivamente en minoría.

A su vez, el PCE también hace gestos convincentes para aproximar sus posiciones a los reformistas franquistas. Después del cambio táctico de las CCOO, el PCE renunció a la que había sido su consigna fundamental de los últimos años: la ruptura democrática. Sin ninguna imaginación, pero aún con menos vergüenza, se enarboló aquello de “ruptura pactada”. Eran los años de la claudicación, cuando la pendiente política en la que había entrado el PCE hacía invocar a sus militantes “Juan Carlos escucha, el pueblo está en lucha”. Poco después de la legalización, con motivo de su primer mitin, S. Carrillo anuncia el abandono de la reivindicación republicana. El PCE acepta la Monarquía que le había legalizado. Así, en pocos años, el PCE había liquidado toda su legitimidad como fuerza histórica antifranquista. Su último paso fue, precisamente, el de abandonar el subterfugio de la “ruptura pactada” para aceptar simple y llanamente el pacto sin ruptura.

Las intrigas en el terreno político tienen su correspondencia en la labor de zapa de los sindicatos en el seno del movimiento obrero. Reconvirtiéndolo hacia posiciones razonables de moderación en las exigencias salariales y orientando los nuevos contenidos hacia el debate sindical, hacia la consolidación del modelo sindical para el régimen democrático en el que pugnaban las dos centrales mayoritarias (CCOO y UGT), con las minoritarias (CSUT, SU, USO, CNT) intentando garantizar su futuro en la nueva situación que se avecinaba.

Es la época de criminalización de los autónomos y de todas las fuerzas desestabilizadoras del proceso pactista. Lo que estaba en juego para la dirección de las centrales sindicales era la demostración de su capacidad de gestión de la fuerza de trabajo y de (evitación) de las tendencias más radicalizadas del movimiento obrero. De su éxito en desarticular a éste último, dependería su reconocimiento e institucionalización dentro del nuevo aparato de Estado, como interlocutores del Pacto Social que, una vez consumado el pacto político (Moncloa), hiciese posible la reestructuración (reconversión industrial, con despidos masivos y cierres de empresas, en muchos casos subvencionados por el Estado) y la reconducción económica en el sentido de incrementar las rentas del capital durante la Transición.

La coartada de la Transición (el miedo a la involución y la necesidad de recuperar la economía nacional) en manos de los sindicatos legitimó por parte de sus representantes la asunción del discurso de la crisis en los términos estrictamente capitalistas que presentaban como única opción posible la salvaguarda de los intereses (beneficios) del capital. Se entra en la fase de discurso de la “economía nacional” y de la necesidad de que “todos” contribuyan a la recuperación económica.

A la muerte física de Franco, en la cama, le sigue la unidad de acción de todas las fuerzas pactistas respecto a su sucesor: el Estado democrático. A la pregunta retórica “después de Franco,

¿qué?”, las fuerzas pactistas responden: “después de Franco, el Estado”, de ese modo negocian la transición política y crean toda una burocracia regional para pactar la Constitución, que culminará en 1983 con el reconocimiento de 17 comunidades autónomas, con sus respectivos estatutos y parlamentos. Esto ocasionará un aumento considerable del gasto público que hará que el Estado imponga una severa política de impuestos, pasando las declaraciones de renta personales de dos millones en 1983 a doce y medio en 1993.

Es mucho lo que se pacta, aparte de la Constitución: el reparto a dedo del patrimonio inmobiliario sindical enajenado al acabar la Guerra Civil; el silencio más absoluto sobre el pasado, tanto sobre los hechos, como sobre las trayectorias personales; el sistema electoral, para el que se escoge el modelo D'Hont, que favorece a los conservadores y excluye a las pequeñas formaciones políticas; el mantenimiento, sin purgas, tanto del ejército franquista, como de la represora policia; el respeto y trato de favor, en el aspecto ideológico y económico, de la iglesia católica, a pesar de calificarse al Estado como aconfesional; el consenso en la persecución de los independentistas vascos, incluida la llamada “guerra sucia” llevada a cabo desde el aparato policial del Estado (Batallón Vasco Español, GAL) y un largo etcétera en el que también hay que contar los más variados aspectos de la vida cultural y social.

Los años ochenta ven, así, configurarse una especie de neocorporativismo en virtud del cual sindicatos, Gobierno y Patronal fijan las bases para llevar a cabo una profunda reestructuración del aparato productivo cuyo resultado más palpable se manifiesta en la recuperación de la cuota de productividad favorable al capital, la pérdida de iniciativa de la población asalariada en la negociación de sus condiciones laborales (modelo salarial) y el aumento del número de parados. Se produce, así, un cambio drástico en el comportamiento de la población asalariada, en el sentido de delegar la negociación en los profesionales de los sindicatos, que toman como referentes los acuerdos-marco y los dictados de la inflación oficiales, frente a la táctica de negociación por medio de los representantes asamblearios y sobre la base de reivindicaciones surgidas del propio proceso de discusión en las asambleas.

Pacto social y reconversión: la desarticulación del movimiento obrero

Desde tiempo antes de la muerte de Franco, el empresariado autóctono y el vinculado al capital transnacional ya había explicitado la necesidad de proceder a reformas que impulsaran la modernización del sistema socio-productivo, de acuerdo con las necesidades que presentaba la inserción de la Península Ibérica en la cadena fordista transnacional. Para ello, el control del m.o. era una condición indispensable. Una condición que sólo una fuerza de “izquierda” estaría en condiciones de llevar a cabo, pues sólo ella legitimaría la imposición de las medidas de crisis sobre un m.o. excesivamente acostumbrado a las movilizaciones. Así fue como se recreó el PSOE.

Hasta entrados los años 70 el PSOE apenas contaba con una escasa presencia, que se limitaba a algunos núcleos en las minas asturianas y en el País Vasco, además de unas cuantas personalidades del mundo de la cultura. Es a partir de los primeros síntomas de quebranto en la salud del dictador (verano 1974) que la reconstrucción del PSOE se intensifica(1). Una vez eliminada la vieja guardia histórica del socialismo en el congreso de Suresnes, el PSOE aparece como la fuerza renovada que socava la hegemonía del PCE sobre la oposición, y que es suficientemente flexible como para aceptar la monarquía franquista y pactar la transición democrática con franquistas reformistas y comunistas, cosa a la que los “socialistas históricos” ponían problemas. El Pacto de la transición sancionaba el continuismo con las instituciones y aparatos de la Dictadura, por eso era necesario contar con una fuerza política que pudiera acceder al Gobierno como expresión simbólica y legitimadora del “cambio”, tal como sucedió con el PSOE.

La legitimación de la Transacción: la recreación del PSOE

Desde 1970, pero sobre todo desde 1973, los fondos canalizados a través de la Fundación Friedrich Ebert y otros “amigos” y financieros de la Internacional Socialista (2), hicieron posible la reconstrucción urgente de un PSOE en condiciones de competir con el PCE por el protagonismo

de la oposición antifranquista. Fondos extranjeros y tolerancia de las autoridades tardofranquistas ayudan al PSOE a rehacer sus filas en el interior. Así, mientras se intensifica la represión contra el m.o. (que alcanza incluso a CCOO), tiene lugar en Madrid el XXX Congreso de la UGT (ilegal) con el beneplácito del Gobierno de Suárez, que intentaba con ello limitar en el plano sindical el monopolio representativo de las CCOO. De ese modo, en un tiempo mínimo, el PSOE y la UGT, se erigen en fuerzas negociadoras de la Oposición (3).

Entre tanto, el PSOE procede a realizar una depuración ideológica (renuncia al marxismo y a cualquier veleidad socializante), mientras el PCE realiza su particular puesta al día renunciando, a su vez, al leninismo y reconociéndose en la nueva ideología eurocomunista. El PSOE aparece, así, a comienzos de los años 80, como el garante del plan de modernización en tanto única fuerza política, legitimada por su carácter de izquierda moderada (el PCE, a pesar de todo, era visto con desconfianza por las fuerzas vivas del franquismo reformista), capaz de gestionar la reestructuración industrial y social.

Paralizar las movilizaciones obreras y sentar las bases de paz social y colaboración político-sindical necesarias para restaurar las condiciones de gobernabilidad social y la acumulación de capital son las líneas fundamentales que inspiran el Pacto de la Moncloa (octubre 1977). Un pacto político firmado por los partidos políticos, pero que los sindicatos hicieron suyo con absoluto entusiasmo. A partir de esa fecha, comienza a hacerse efectiva la transición pactada durante los años precedentes (los años de la transacción, propiamente dicha).

Como correlato al pacto político (de la Moncloa), a lo largo de la década de los 80 tiene lugar una serie de pactos (AMI, AES, ANE, Estatuto de los trabajadores) en los que se van configurando un modelo de relaciones laborales que llevará hacia la desregulación del mercado de la fuerza de trabajo, tal como se perfila en la Ley de Reforma Laboral de 1994.

La característica fundamental que revisten los pactos sociales desde 1977 es la aceptación de los aumentos salariales por debajo de las tasas oficiales de inflación, la disminución de la conflictividad laboral (número de huelgas y de horas) y la eliminación de las formas de resistencia autónomas. Con este panorama, el PSOE lleva a cabo la reestructuración comenzada por UCD, que tiene por objetivo la plena integración del sistema productivo español en el engranaje militar-industrial transnacional (CEE y OTAN) y la implantación de la lógica económica, como última instancia argumental del discurso de la reconversión.

Con la legitimidad que le dan los once millones de votos de las elecciones de 1982, el PSOE se sentirá en condiciones de aplicar una política rigurosa en el ámbito general de la economía y, especialmente, en la industria: devaluación de la peseta, cierres de empresas (siderurgia, naval, electrodomésticos, minas) y privatización de sociedades públicas. El ingreso en la CEE se producirá a cambio de numerosas concesiones en el terreno industrial y agrario, solapado todo ello por la llegada de capital extranjero durante 1986-90 que produce una hinchazón de la economía española (Expo y Olimpiadas de 1992). De todo ello queda una economía con una recesión agravada por la reorientación de las inversiones europeas hacia nuevos focos de atracción en los países del Este (Hungría, Polonia, Eslovenia y países de Extremo Oriente) en detrimento de las inversiones en el sur de Europa.

La aparente facilidad con que los tecnócratas del PSOE han gestionado la transición y la conflictividad derivada de la reestructuración (reconversión industrial) hay que atribuirle, entre otras causas, al debilitamiento del movimiento obrero en el que la burocracia sindical jugó una baza primordial a la hora de neutralizar las tendencias autónomas, introduciendo elementos de división interna en las mismas asambleas (discusión sobre la unidad sindical), el miedo al golpe militar y, desde luego, el fuerte aumento del paro que mantiene una línea ascendente hasta estabilizarse en torno al 17-20% en los años 90.

La gestión de la reconversión contribuyó a descabezar el m.o. neutralizando la parte más militante del mismo. Pero sobre todo el factor decisivo fue la inadecuación de la estrategia sindical (incluida la de carácter asambleario) ante las nuevas condiciones en que se lleva a cabo la reconversión. Con las fábricas abocadas al cierre, la acción sindical evidenciaba sus limitaciones, precisamente porque se revelaba incapaz de presentar una alternativa a la lógica de la negociación basada en la valorización del puesto de trabajo (4).

Las puestas en escena del golpe militar en Febrero de 1981, más allá de todas las anécdotas sainetescas en las que un guardia civil de medio pelo vio cómo le dejaban en la estacada sus cómplices, revistió una especial importancia para avalar el acceso al Gobierno del PSOE. El miedo, hábilmente administrado desde los medios de adoctrinamiento de masas, sirvió para reforzar la opción del PSOE en su proyecto de control del m.o., que se plegaría aún más a la “recuperación de la economía nacional”. Además, la representación golpista serviría para certificar el paso definitivo del Rubicón democrático para el Estado Español, al tiempo que se generaba un nuevo mito en torno a la figura del monarca que, a partir de entonces dejará de ser el rey nombrado por Franco, y que juró los principios fundamentales del Movimiento, para ser el rey demócrata de “todos los españoles”. Era necesario, a fin de cuentas, que los últimos residuos del franquismo cuartelero asomara la cabeza, para acabar de convencer al resto de la tropa que los intereses de la casta militar estaban definitivamente del lado de las instituciones democráticas.

Era necesario que los militares que aún no habían entendido por dónde iban los tiros del Pacto de Transición asomaran la gorra reglamentaria para retirarlos definitivamente de la escena. Desde luego, el peligro militar no era —ni entonces, ni ahora, ni nunca, claro está— desdeñable. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el ejército español en sus últimos cien años de historia no cosechó sino derrotas en sus misiones imperialistas (Cuba y Filipinas, guerra del Rif, hasta la retirada y venta del Sáhara al rey Hassan de Marruecos) y en su hoja de servicios tan sólo se contabiliza una victoria; precisamente, la (única y malhadada) Victoria sobre la clase trabajadora, después de una guerra que le costó ganar tres años, a pesar de haber contado con la ayuda activa de la Alemania hitleriana y la Italia fascista, además de la inhibición de las democracias liberales.

Sin embargo, los militares ya habían sido debidamente neutralizados en los años anteriores al golpe de 1981. Para esta fecha ya se les habían dado suficientes garantías de que sus privilegios serían escrupulosamente respetados por el nuevo régimen democrático. Serían, precisamente, los socialistas en el Gobierno quienes les subieran los sueldos, facilitarían las jubilaciones en condiciones ventajosas y continuarán favoreciendo los intereses de la casta militar en el manejo del presupuesto de Defensa y en la industria de armamento, en donde muchas empresas cuentan con presencia de altos mandos militares en sus consejos de administración.

Consenso y terrorismo

A continuación del golpe de 1981, el ascenso del PSOE al poder reforzaría aún más la política de consenso en torno a un gobierno de izquierda, que sería el encargado de llevar a cabo una nueva fase de modernización capitalista en España. El extraordinario apoyo electoral obtenido en las elecciones de 1982 por el PSOE, avalaba su figura como vanguardia de una España que quería ser moderna y europea frente a la rancia pesadilla que encarnaba el esperpéntico oficial del tricorno pegando tiros en el Parlamento. Sobre esa base de legitimación, contaría el PSOE a la hora de tirar para adelante una inflexible política de reestructuración a lo largo de más de una década.

Pero tampoco conviene olvidar la utilización del terrorismo (de ultraderecha y de izquierda) a la hora de consolidar el consenso y reorientar la movilización de masas hacia actos simbólicos de repulsa al terrorismo “desestabilizador e involucionista”. En torno a la explotación espectacular del terrorismo se consolida un nuevo frente de consenso bajo la fórmula de “todos contra el terrorismo”. Cunde el amedrentamiento entre la población asalariada y la violencia de masas (piquetes, sabotajes, ocupaciones, etc.) pasa a ser criminalizada por el nuevo discurso democrático, como acciones “que hacen el juego” a los terroristas. Los espantosos asesinatos de los abogados laboristas de Atocha tuvieron un carácter ejemplar y una indudable rentabilidad política a la hora de estrechar el consenso.

En este sentido, la instrumentalización de los asesinos de la ultraderecha y sus connivencias con el aparato policial cumplieron un papel relevante en la política de terror impuesta por el Estado transicional. Aún más evidente fue en el denominado “caso Scala”, en el que la provocación policial indujo una acción encaminada a desencadenar la represión y criminalización del movimiento libertario. El propio Martín Villa, ministro del Interior, no se recató en reconocerlo ante millones de espectadores, cuando en una entrevista televisiva, manifestó su preocupación por el auge que parecía que iba tomando el movimiento libertario.

1.- A partir de aquí, el PSOE buscará una mayoría parlamentaria con un discurso ambiguo, de centro-izquierda, olvidando sus anteriores consignas antinorteamericanas, de reconocimiento de los derechos de autodeterminación (País Vasco, apoyo a la República Árabe Saharaui, etc.), anti-OTAN, etc.

2.- El empresario venezolano Cisneros, que fue debidamente recompensado con motivo de la expropiación de Rumasa, entre ellos.

3.- Para ello crea su propia esfera de oposición (la Plataforma) con la que romper el monopolio representativo de la Junta Democrática comandada por el PCE.

4.- ver Ekintza Zuzena, n. 13, otoño 1993, pág. 25 y ss. Ediciones E.Z. Apdo. 235. 48080 Bilbo (Bizkaia). Etcétera, n. 23, mayo 94 (Reestructuración en SEAT: una reflexión sobre la condición obrera).

Modernización y transición hacia el vacío

En 1982 un destacado militante comunista escribía, “¿Por qué las fuerzas políticas de la oposición histórica aceptaron el procedimiento reformista y archivaron el rupturista? Porque eran conscientes de sus debilidades coyunturales complementarias con las debilidades de los reformistas. Sobre esta correlación de debilidades, que no de fuerzas, de cernía la espada de damocles de la involución...” (1). Tenía razón. En parte coincide con lo que aquí se viene afirmando; sin embargo, quedarse ahí, en el reconocimiento de las debilidades de la oposición y, con ello, pretender justificar la política de claudicaciones seguida por el PCE, en tanto principal fuerza de la oposición, quizás satisfaga a quienes en su análisis no son capaces de ir más allá del aparato, del Partido, como devotamente se decía entonces.

Pero el papel que jugaron el PCE y las CCOO en su combate sistemático contra las tendencias autónomas del m.o. tiene también otro significado. A saber: el de los límites históricos, políticos e intelectuales de los partidos comunistas (en tanto administradores del sucedáneo ideológico marxista) para sobrepasar las reglas impuestas por el capital en cada coyuntura de la lucha de clases.

Cuando en los años 20 la izquierda comunista germano-holandesa calificaba a Lenin y sus seguidores como la extrema izquierda de la ideología burguesa en el ámbito de la crítica teórica, podía parecer un exabrupto de la irremediable enfermedad infantil del izquierdismo, sin embargo, la Historia acabaría dándoles la razón o, dicho de otro modo, los partidos comunistas se encargarían de confirmarlo en la práctica. A la hora de escoger entre la burguesía y el proletariado, los partidos comunistas indefectiblemente se inclinaban por la primera. Y en España así había sido durante el periodo 1936-39, y así volvería a repetirse en los años 70. El resultado de todo ello lo tenemos veinte años después: la extinción del PCE, siguiendo la tónica del resto de países capitalistas, como consecuencia de su total inadecuación a los cambios operados en la dominación (real) del capital.

Los sindicatos tampoco corren mejor suerte. Su labor de contención y desmovilización de los trabajadores los ha llevado a la marginación. La escasa afiliación sindical obtenida hasta 1977, a partir de esa fecha comienza a descender. Algo perfectamente comprensible, si tenemos en cuenta que lo único que puede reforzar la acción sindical es la reivindicación. Si se renuncia a ella, es lógico que los trabajadores les dieran la espalda.

Las centrales sindicales sobreviven gracias a las subvenciones estatales y a las transferencias de fondos camuflados en planes de formación a cargo del Fondo Social Europeo. El cambio de la dominación formal a la dominación real del capital ha convertido a los sindicatos en un anacronismo. Por otra parte, su política de pacto social ha traído como resultado una desregulación del mercado laboral que vuelve completamente inoperantes las formas organizativas sindicales. No es, pues, de extrañar que, atrapados en el callejón sin salida a que los ha conducido su sometimiento a las leyes de la economía de mercado y a los dictámenes del Gobierno, hayan rechazado participar en las acciones de protesta convocadas por la Plataforma Cívica de los Derechos Sociales que, apoyada por Izquierda Unida, pretendía conmemorar el 27 de enero de 1995 la jornada de huelga general del año anterior.

Por supuesto, la crisis de los aparatos sindicales y políticos de la izquierda está en la misma onda de declive de las formaciones político-sindicales surgidas después de la II Guerra Mundial, pero en el caso español es especialmente patético ver los residuos de la izquierda erigirse en el último bastión de la democracia; precisamente, en un momento en que el estado de la transición revienta de escándalos (GAL, corrupción financiera).

Es la prueba, una vez más, de que la izquierda política actual, heredera de las dos corrientes dominantes en el movimiento obrero internacional (socialdemocracia y el marxismo-leninismo)

continúan siendo la extrema izquierda de la democracia burguesa, sin quererse enterar de que a estas alturas la Democracia decimonónica ha dejado de ser el instrumento de dominación política del Capital. Como si nada hubiera pasado, los aparatos administrativos de la izquierda continúan aferrados a todos los clichés del “cretinismo parlamentario” que en su día denunciara Rosa Luxemburg.

Estas dos últimas décadas han sido las de la pérdida del sentido reivindicativo, alentada desde los sindicatos, que pedían sacrificios a la población trabajadora para la “recuperación de la economía nacional”, primero, y para la creación de empleo, más recientemente. Los resultados están a la vista. Profundización de la crisis, precarización creciente de las condiciones laborales, alta tasa de desempleo, que no desciende del 17%/20% de la población activa. Los sindicatos, como los partidos, nada tienen que ofrecer a la población asalariada porque nada tienen que negociar. En unas condiciones de crisis estructural, las exigencias de la acumulación de capital no permite márgenes de negociación salarial de ningún tipo.

Cuando la práctica de la desmovilización ha sido la tónica general de la transición, ¿cómo podemos extrañarnos de la pasividad generalizada ante la descomposición política reinante en la actualidad? Dos décadas predicando la sumisión a los dictados de la economía de mercado y del estado democrático continuista han contribuido a perpetuar muchos de los vicios heredados del régimen franquista, tanto en las prácticas políticas (oportunismo, clientelismo, autoritarismo, etc.), como en la conciencia de las gentes. La brillante ejecutoria de la Transacción democrática en el Estado Español ha impulsado una Transición hacia el vacío.

En este sentido, la Transición ha sido un verdadero tránsito para la clase trabajadora española, que ha recorrido en unos pocos años el trecho que va de la dominación formal del capital a la fase de dominación real en la que estamos confrontados a nuestras propias limitaciones históricas como sujetos asalariados. De hecho, ya no podemos afirmarnos en nuestra condición (formal) proletaria porque cada vez tenemos menos margen para negociar. Ya no tiene sentido reivindicar nada, porque nada tienen que ofrecernos los administradores del Capital y la Política, salvo precarización, reducción de los ingresos y las prestaciones sociales, incremento del control social y marginación.

También están las –no por ocultadas, menos reales– desafecciones y deserciones que caracterizan una vida cotidiana que transcurre entre un marasmo de ambigüedades: resentimiento frente al trabajo y necesidad de él para obtener el dinero con que sobrevivir, inhibición de la acción social que “deja hacer” a los depredadores del sistema legitimados por esa misma inhibición que representa votar cada cuatro años, conciencia de la miseria individual e intento de conjurarla en el consumo compulsivo de horrores, escándalos, imágenes efímeras, tópicos perseverantes, cachivaches electrónicos, alimentos dietéticos y toda suerte de sucedáneos de solidaridad con los desgraciados de otras partes del planeta.

Ese es, en parte, el resultado de nuestro tránsito a la llamada “sociedad postindustrial”. Esos son los ingredientes del drama cuyo argumento es la imposibilidad de afirmarnos en nuestra condición proletaria porque ni el Capital sabe qué hacer con nosotros (a no ser destruirnos mediante el paro, la marginación, la enfermedad o la guerra), ni nosotros qué hacer con el Capital.

La complejidad alcanzada en el sistema de producción social de mercancías está fuera del alcance de cualquier expresión de “control obrero” posible. Simplemente, no sabríamos qué hacer con los centros de producción, los medios de distribución y los demás servicios auxiliares de la reproducción social. En cierto modo, el fracaso de las luchas obreras de la reconversión industrial así lo ponen de manifiesto. Los trabajadores más directamente implicados en los sectores reconvertidos fueron a la zaga de las iniciativas de la Administración y sólo se encontraron en un estado de total perplejidad cuando descubrieron que conservar el puesto de trabajo y afirmarse en su condición (formal) obrera, de fuerza de trabajo, no tenía ningún sentido porque el valor de su fuerza de trabajo era nulo.

El cambio de coyuntura en la forma de dominación del capital, ha modificado los términos en que se aplica la lógica de la valorización en el mercado de la fuerza de trabajo, de manera que la mercancía fuerza de trabajo en los sectores productivos obsoletos (siderurgia, astilleros, minería, etc.) ha perdido su valor de mercado. En esa tesitura, los trabajadores, ya no estamos en condiciones de negociar en función de un valor (oferta de su fuerza de trabajo) que ya no cotizaba en la nueva coyuntura del mercado capitalista. Habrá, pues, que presentar la confrontación con el capital en otros términos más realistas, en consonancia con la real dominación del capital.

En el futuro ya no podremos hacer valer nuestra condición de fuerza de trabajo para afirmar nuestra existencia. Llegados a este punto, por mucho que escurramos el bulto, la confrontación con la realidad más inmediata nos impone una reconsideración de nuestro posicionamiento dentro de la lógica que domina en las relaciones sociales capitalistas. Quizás porque ya no es posible afirmarnos formalmente como asalariados haya llegado el momento de afirmarnos realmente desde nuestra estricta condición de seres humanos. De lo que no cabe duda es que, tal como están las cosas, esa es la posibilidad más arriesgada, pero también la más perentoria si no queremos dejarnos arrastrar por la espiral aniquiladora que rige el curso de la Historia dominada por la relaciones capitalistas.

1.- M. Vázquez Montalbán. *Tiempo de Historia* (Balance de cinco años), año VI, N. 72 (número especial).

De los movimientos sociales a los “profesionales de lo social”

Las fuertes reestructuraciones sociales que se produjeron a lo largo de los años franquistas como consecuencia de las transformaciones económicas que obligaban a concentraciones obreras en las grandes ciudades, sucedieron de forma tan rápida que crearon graves problemas de hacinamientos, escasez de infraestructuras y servicios sanitarios. Esto, unido al atraso endémico de este país en lo que se refiere a estructuras de bienestar social, hizo que, a partir de los años 60 y parejo al desarrollo de la lucha obrera en la fábrica, se empezase a extender la lucha reivindicativa por la mejora de los barrios y contra los planes urbanísticos franquistas a favor de especuladores de todo tipo.

Al amparo en muchos casos de los grupos cristianos de oposición al franquismo fue creciendo un tejido social multiforme en el que se recreaban todas las tendencias políticas de oposición pero sobre el que destacaba una voluntad real de controlar el máximo de aspectos que conciernen a la forma de vida de los trabajadores fuera de la fábrica. Las luchas por escuelas, ambulatorios, transporte, zonas verdes, viviendas, etc., se fueron sucediendo llegando a un espectacular crecimiento a lo largo de los años 70 en que una cierta tolerancia política permitió despegarse de la Iglesia.

Eran los años de los movimientos sociales: los estudiantes paraban la universidad y los institutos reclamando una mayor participación en la toma de decisiones; las mujeres, en lucha por sus derechos, rompían las normas represoras franquistas, al igual que otros grupos discriminados como los homosexuales, los minusválidos, etc., los presos exigían, mediante fuertes motines, la reforma carcelaria y la amnistía...

Después de largos años de duros enfrentamientos: hoy aquí, mañana allá; con la muerte de Franco y el vacío de poder que a consecuencia de ello se dio, lo social estalló por todas partes. Todo parecía posible en ese momento, todo podía cambiarse si se participaba. Los marcos legales existentes eran rechazados sistemáticamente por su vinculación al pasado. Ningún Plan, ya sea urbanístico, de estudios, o de reforma de instituciones estatales, debía respetarse dado su origen sospechoso. Por todas partes proliferaban comités de afectados que lograban imponer sus criterios ante una Administración que, aturdida frente a un futuro incierto, se veía obligada a dialogar.

Junto a las reuniones informativas, las conferencias o las asambleas, abundaban los cineclubs, los grupos teatrales, las fiestas populares, etc. La gente quería saber sobre las luchas que se daban, pero también quería conocer cuales eran las distintas tendencias políticas, las vanguardias artísticas o de pensamiento y desarrollar aquellos aspectos de que nos privaba el franquismo. Para ello se devoraban libros, revistas o periódicos que, en aquellos años, también habían roto con los criterios de censura tradicionales y cumplían un importante papel de información y propagación de las distintas expresiones del propio estallido social.

Los movimientos reivindicativos integraban en sus filas las mismas tendencias políticas que el movimiento obrero y al igual que este, en España en estos años, prevalecía la “indisciplina” que hacía difícil su encuadramiento. Fácil era encontrar mezcladas la mera reivindicación con la insumisión social. Frente a los grupos que practicaban el posibilismo político se alzaban otros que propugnaban la ruptura total con las formas de cultura y civilización modernas: “abajo los muros de las prisiones, de las escuelas, de la familia, de la mente”.

La operación de transición tuvo que tapar también estas grietas de lo social a fin de conseguir la pacificación que necesitaba para el desarrollo del proyecto de país que se tenía en mente. Para el desarrollo económico que se pedía y vaticinaba era necesario el abandono radical de las veleidades protagonísticas que se daban en estos grupos. Había que conseguir transformar ese entusiasmo por la acción en un entusiasmo por un diálogo de reforma hacia la “modernidad”.

Los primeros ayuntamientos democráticos, constituidos por los protagonistas políticos de estos movimientos más tendentes al diálogo, lo hicieron posible. Se concedieron parte de los servicios que se reivindicaban en los barrios pero, eso sí, conservando el control institucional de los mismos mediante expertos. Si los jóvenes pedían dinero para mantener un local elegido por ellos, se decidía abrir un Centro de Jóvenes con profesionales como “asistentes sociales”, “animadores de calle”, en fin guardianes del orden, y los jóvenes volvían a encontrarse en la calle esta vez divididos ya que los dóciles aceptaban de buen grado las leyes internas. Si las mujeres reivindicaban un local donde reunirse y poder desarrollar autónomamente un conocimiento sobre su cuerpo que les hiciese fuertes frente al poder médico, se les abrieron centros de planing de barrio integrados por técnicos “ginecólogos, sicólogos, etc.” con lo que aún crecía más ese poder médico.... Las asociaciones de vecinos pasaron a depender de las subvenciones de los ayuntamientos con lo cual se favoreció el poder de los grupos políticos afines. Se instituyeron las asociaciones de padres en los colegios, las de estudiantes en los institutos y universidades, o los grupos de voluntarios por aquí y por allá. A los presos se les calló con una Ley de reforma penitenciaria, la criminalización de la droga y el aislamiento.

Pero esto no fue fácil. Fueron necesarios muchos pactos y, sobre todo, un crecimiento espectacular de la burocracia estatal a base de trasiegos de puestos funcionariales que pasaron a ser ocupados por personal formado en esas luchas. Se podía “confiar en ellos” y se delegaba así toda responsabilidad. Para cada problema apareció un experto y dejó de tener sentido reunirse para discutir causas y soluciones, ellos sabían más y el resto, “los aficionados”, podían dedicarse tranquilamente a lo suyo, consumir. Consumir incluso esos mismos servicios olvidando la consigna de “libres y gratuitos” tan aclamada esos años.

En fin, el consenso crecía, conformado por reformistas de todo tipo y sustentado en un constante abandono de la calle por una gente cansada, “quemada” como se decía entonces, y que había optado por la delegación del poder. Las ilusiones, una vez más, daban paso a la desesperanza. Así quedó vacío de sentido toda acción o pensamiento crítico que pudiera poner en peligro la estabilidad. Había sólo lo que podía haber.

Con la llegada de los socialistas al poder, la tendencia se fue profundizando hasta llegar un momento en que la apatía social se presentaba como un serio problema, dada la necesidad que tiene el Estado de un mínimo diálogo social que sirva de justificación de su gestión y de medio de integración. Porque no es suficiente el voto sumiso, se intenta por todos los medios fomentar un movimiento, eso sí estructurado y subvencionado, de voluntarios sociales en los que se puedan canalizar insatisfacciones e impotencias.

El cuidado de ancianos, la recogida de juguetes para niños inmigrantes, la ayuda humanitaria al tercer mundo, son míseros paliativos a los desastres que sigue arrastrando e incrementa el orden social moderno: el abandono, la soledad, la discriminación y la miseria. Pero están muy lejos de poder conectar con las ideas de colectividad, mutua ayuda, autoafirmación y autogestión que se dejaban entrever aquellos años de impulso transformador.

Correspondencia

Desde MADRID

Estimados compañeros:

En primer lugar, muchísimas gracias por vuestro envío, tanto del nº 7 de *Crítica de la política*, como del número de noviembre de *Etcétera*.

Quería comentaros varios aspectos acerca de los artículos (razones) que publicáis en *Etcétera* – *Correspondencia de la guerra social*.

Sobre el artículo titulado *la guerra de Argelia y el caso argelino*, pienso lo siguiente: los principales culpables de la situación en la cual viven los países árabes son en buena parte los países “occidentales”, es decir, los países en los cuales impera un sistema económico capitalista burgués, por varios motivos, el primero de los cuales es el continuo apoyo concedido a Israel desde 1948 (constitución de este estado en claro perjuicio de Palestina), no es que se le vaya a negar un estado al pueblo judío, pero entonces se le dio un estado expropiando a otro pueblo y dejándole a merced de Israel, me refiero a los palestinos. Además, continuamente se le apoya económicamente con préstamos (EE.UU.), acuerdos preferenciales de todo tipo (CEE), etc. Se olvidan matanzas como las de Sabra y Chatila (para eso los EE.UU. tienen el derecho a veto, un derecho antidemocrático donde los haya, en la ONU.), etc.

El segundo motivo, no menos importante, es la miseria en la cual viven esos países, fruto tanto del sistema económico a escala mundial existente como de los propios regímenes de esos países, regímenes en algunos casos de tipo feudal (Marruecos, Arabia Saudita, Kuwait, etc.), en otros teñidos de un falso nacionalismo “progresista” (Siria, Irak, Libia, la misma Argelia, etc.), en otros teocráticos e integristas (Irán), en fin regímenes donde faltan los más elementales derechos “democráticos” (democráticos burgueses, por no hablar de explotación del hombre por el hombre, represión, etc., etc., etc.).

Sin duda, todas estas realidades son el mejor caldo de cultivo para la demagogia del integrismo islámico, no olvidemos el caso de Irán, donde la pretendida “revolución” islámica no ha tocado para nada las relaciones de producción imperantes anteriormente (capitalistas y en algunos casos semi-feudales), las ha mantenido apoyando a un capitalismo nacional frente al capitalismo multinacional, pero esta situación actualmente está variando, puesto que los dirigentes de Irán permiten la entrada de capital internacional.

Por tanto si el FIS se impone en Argelia, tendremos un segundo Irán con todas sus consecuencias, y no olvidemos la fuerza de atracción que puede tener para egipcios (donde el integrismo cada vez cobra más fuerza) este hecho.

Sobre el artículo acerca de Cuba (sobre Cuba) pienso que a pesar de la fuerza de atracción que pudo tener en un principio la revolución cubana (yo todavía no había nacido cuando tuvo lugar), ha perdido todo su encanto inicial, y lo que existe actualmente en Cuba es ni más ni menos que un capitalismo de estado, edulcorado durante la primera época (1961-1965) por los bellos discursos del Che (sobre el hombre nuevo, sobre su idea de gestión económica por los mismos trabajadores, contra el imperialismo yanqui, etc.) y de Fidel Castro. En Cuba, como en el resto de los países denominados “socialistas”, existentes hasta hace pocos años, quien ha detentado el poder no ha sido “el proletariado organizado como clase dominante” (Marx), sino la burocracia, una burocracia cada vez mayor y más parasitaria. Sin embargo, no se puede pasar por alto el auténtico terrorismo internacional ejercido por los EE.UU. contra Cuba desde antes incluso de Bahía Cochinos, hasta culminar con el bloqueo existente actualmente. No olvidemos que antes de la revolución en Cuba el poder lo ejercía un dictador fascista (Batista), más del 90% de la economía cubana era propiedad privada de las multinacionales yanquis, La Habana era el mayor prostíbulo del Caribe, y algunos de los que ahora piden “libertad” (¿para quién?) desde Miami u otros lugares eran lacayos explotadores a sueldo de esas multinacionales. No se pueden negar algunos logros de la revolución: educación, sanidad, cultura, etc., pero no debemos olvidar que Cuba no es ningún país socialista, que sigue existiendo trabajo asalariado, que existe una clase dominante (la burocracia), en fin que los trabajadores no gobiernan sino que el poder es ejercido en su nombre.

Acercas del artículo acerca del problema nacional Yugoslavo, creo que el artículo de Cíliga tiene plena validez hoy día y explica tanto el tema de las nacionalidades como la búsqueda por parte de Tito y la Liga Comunista Yugoslava de un sustituto al estalinismo que pudiera, en cierto modo, ser “aceptable” para occidente (autogestión, mercado, economía que admita intercambios sobre todo con la CEE, etc.).

El texto sobre Chiapas y el titulado “Hemos perdido las razones y con ello la razón” lo dicen todo. No hacen falta más comentarios.

Por último, deciros que me llena de alegría que haya personas como vosotros que creen que hay que luchar en vez de lamentarse, combatir por cambiar el mundo, buscar la utopía para traerla al presente. Hay que tener esperanza, la esperanza no es sólo voluntarista, es creer en el hombre y su capacidad para crear un mundo nuevo. La esperanza está hecha de lucha y confianza en un futuro sin guerras, ni patrias, ni fronteras, donde todo sea de todos, donde no

existan alienaciones, donde no exista lo tuyo y lo mío, donde el hombre por fin sea libre y comience a construir junto con sus iguales la auténtica historia de la humanidad

Un saludo fraterno, libre y solidario. Salud y adelante.

José D, febrero 1995

Desde EE.UU.

Trabajo para el estado de Virginia, y Virginia está intentando aborrrar dinero recortando programas, incluyendo los estudios superiores. Una buena parte de tiempo, a lo largo del último año, se gastó redactando informes para justificar el programa que yo dirigía. En general, el estado quiere aborrrar millones de dólares economizando en cada una de sus operaciones, por ello, el gobernador James Allen, puede proclamar una bajada de impuestos para “la clase media” (ahora, en lenguaje habitual en USA “clase media” significa aquellos que tienen un trabajo fijo). Al mismo tiempo Allen se embarcó en un ambicioso programa de construcción de cárceles. Como Virginia, lo mismo que otros estados aprobó la ley “tres golpes y estás fuera”, las cárceles se están llenando de “criminales” convictos por tres veces de delitos inocuos tales como robos de tiendas o venta de pequeñas cantidades de marihuana en la calle. Como esta política llevará a saturar las ya atestadas cárceles, el gobernador necesita reunir 3.500 millones de dólares para construir nuevas prisiones. Así, mientras todos los otros servicios e instituciones públicas están siendo recortados o eliminados, el estado se hipoteca para un futuro en el que todo aquel que no sea clase media terminará probablemente en la cárcel, quizás de por vida.

Virginia es claramente representativa de los Estados Unidos actuales. Las elecciones pasaron, los Republicanos ganaron y están muy ocupados poniendo en marcha su programa ultra-derechista. O eso es lo que creen los liberales y la mayoría de la izquierda. Pero no se trata simplemente de republicanos (derechistas) contra demócratas (liberales) sino de un giro total a la derecha que afecta tanto a los demócratas como a los republicanos. Veamos una estadística significativa. En las recientes elecciones, consideradas nada menos que memorables por todos los entendidos, sólo votó el 39% del electorado. Esto significa que el 61% del electorado considera (aunque pasiva y algo incoherentemente) que votar no cambia nada y que no significa una elección real. La mayoría del 39% restante presta escasa atención al proceso (a pesar de la publicidad masiva en la televisión y los infinitos debates en los programas de “noticias”) y vota generalmente cabreado. El 20-21% (del electorado total) que votó a los republicanos deseaban protestar del exceso de control gubernamental, de la corrupción, etc.; el grupo duro, principalmente la baja clase media, y la clase trabajadora blanca entre los 18 y los 35 años, lanzados a un delirio racista por los invitados fascistoideos de los programas de radio y los fanáticos líderes de la derecha “cristiana” que dirige sus ataques contra los negros (que son considerados como vividores de la asistencia social) y el crimen (una vez más, los negros). (Además, “welfare” y “crimen” se han convertido en palabras en clave para hablar de negros). Así actúa la mistificación aunque el electorado es tan volátil que puede virar hacia los demócratas en un año o dos. La amnesia es lo propio de la política americana. Los demócratas han abandonado sus bases tradicionales (minorías étnicas, sindicatos) y, como el partido laborista británico, quiere únicamente demostrar a la “clase media” que ellos son los más adecuados para gobernar, lo que significa que son tan derechistas en sus puntos de vista y tan draconianos en sus proyectos políticos como los republicanos. (La amnesia garantiza que los republicanos puedan conseguir pintar a Bill Clinton como un liberal cuando es, para empezar, el líder de una facción dentro del partido demócrata empeñada en revisar la política tradicional del partido hasta el punto que no pueda distinguirse de la de los republicanos.) En suma, demócratas y republicanos se mantienen en todo lo esencial, tanto da, como la mayoría no votante reconoce.

No estoy seguro de si todo esto es nuevo para vosotros —o el hecho de que la situación en USA sea peor de la que ha sido en los últimos cincuenta años. ¿Qué explica esta nueva y en muchos aspectos temible situación? Tiene que ver con el acelerado declinar de los salarios reales, la creciente inseguridad del empleo y el trabajo, y el cierre progresivo del sector público de la economía. A este respecto, la política electoral y las maniobras de los partidos políticos presentan patologías políticas y culturales en las que las víctimas (negros, mujeres, homosexuales, drogadictos) son culpados por las crecientes frustraciones y dificultades que la gente afronta (especialmente el principal grupo de votantes). El problema principal es raramente enfocado, incluso cuando lo hacen los políticos por un lado dicen una cosa y por otro dicen otra, a la fuerza porque los problemas, simplemente, no pueden ser resueltos.

Por ejemplo, el gran no-debate sobre la sanidad pública. Aquí Clinton, el conservador-populista, sacó un tema genuinamente popular. La sanidad se ha convertido en exageradamente cara. Un gran porcentaje de norteamericanos no tienen seguros de enfermedad y los que están asegurados encuentran que su cobertura es escasa o que incluso un gran porcentaje de sus ingresos deben dedicarlos a pagar los seguros médicos. En la última década la sanidad ha sido progresivamente privatizada, y los servicios para los pobres y los ancianos restringidos o abandonados. Así, muchos trabajadores tienen razón al preocuparse por la asistencia médica. Recogiendo este tema, Clinton empezó a señalar

una de las muchas inseguridades que atormentan a los trabajadores. Pero las grandes empresas actualmente consiguen extraordinarios beneficios de los seguros de enfermedad, de la venta de medicinas, de las urgencias en los hospitales privados. Por ello un intento de instituir algún tipo de plan de sanidad nacional encuentra un muro de resistencia en los poderosos intereses corporativos acostumbrados a sacar provecho e inmensas subvenciones de los programas del gobierno (el nivel habitual de raterías y corrupción va más allá de lo imaginable). O más bien, un conservador-populista como Clinton no estaba en una posición seria para desafiar el poder corporativo (por ejemplo intentando instituir un unificado sistema de pago como los que existen en Canadá o en muchos países de Europa occidental). Es más, ni siquiera pudo empezar a convenirlo. Así, Clinton vaciló y transigió, no hizo nada para movilizar el soporte popular y todo el asunto se quedó en agua de borrajas, mientras las corporaciones tuvieron la oportunidad de reforzar sus posiciones, lo que equivale a tener permiso para saquear a voluntad los aborros de los trabajadores y los programas de ayuda del gobierno.

Esta es sólo una parte de la situación que incluye los intentos de las grandes corporaciones de consolidar un bloque o eje USA-Japón (elijo deliberadamente esta expresión aquí), para optimizar las condiciones de explotación del mercado de trabajo chino, para dominar los mercados de trabajo y consumo norteamericanos (NAFTA), y los problemas habituales de las corporaciones con México (la rebelión de Chiapas, un rayo real de esperanza).

Alan, enero 1995, Washington D.C.

Desde Guatemala

LAS CPR DE LA SIERRA Y DEL IXCAN

Guatemala: el país de la eterna primavera, dicen los folletos turísticos; el país de la eterna represión, dice el movimiento popular.

Tan sólo la unión y la lucha en resistencia, (tradición secular entre el pueblo maya), han conseguido romper el cerco de fuego y muerte instalado por el ejército guatemalteco. La resistencia es, desde hace más de 500 años, la única salida que han tenido los descendientes de los mayas para enfrentar la persecución a la que se han visto sometidos durante todos estos siglos. Las Comunidades de Población en Resistencia, (CPR), han sido y son la llama viva de la lucha popular en Guatemala.

Antecedentes históricos

El 20 de octubre de 1944 dio inicio el único período que este país ha vivido en auténtica democracia. La Revolución democrática principiada con el gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951), tuvo continuidad y se profundizó bajo el mandato del coronel Jacobo Arbenz. Pero las medidas de carácter nacionalista y popular tomadas por los gobiernos "revolucionarios" chocaron de frente con los intereses del imperialismo norteamericano. Así, en junio de 1954, una invasión militar promovida, financiada y apoyada por el gobierno yanqui, puso fin al experimento democrático más profundo alcanzado hasta entonces en Centro América.

El final trágico de la década revolucionaria (1), significó, para Guatemala, el inicio de un oscuro y largo período caracterizado por el control militar de todo el aparato estatal. Desde 1954 distintos gobiernos verde-olivo dirigirán las riendas del país y con ellos periódicas olas de terror tratarán de terminar con cualquier muestra de rebeldía y organización popular.

El clímax del terror: 1980-1982

La eferescencia popular que desde finales de la década de los 70 mantenía Centro América al rojo vivo, se reproducían también en Guatemala. Pero el Ejército conocía bien la fórmula para terminar con dicha agitación, dar inicio a una de sus habituales olas de terror. Esta vez el terror se iba a caracterizar por la llamada "política de tierra arrasada".

El Estado guatemalteco, (bajo la tutela del general Romeo Lucas García, 1978-1982), va a terminar con la aplicación de esa vieja táctica militar (2), con el creciente movimiento popular situado, para muchos, en estado pre-insurreccional. La "tierra arrasada" va a traer para miles de familias campesinas el horror, la muerte y el exilio.

Pero el momento álgido de la represión no va a llegar sino hasta 1982 cuando, tras un golpe de estado, asume el poder el fanático evangelista general Efraín Ríos Montt (3). Es en ese año cuando centenares de aldeas van a desaparecer del mapa y decenas de masacres terminaron con la vida de miles de hombres, mujeres, ancianos y niños

(4). Las masacres se producen en la mayor parte del territorio guatemalteco, pero es en dos zonas del norte del departamento del Quiché donde la barbarie militar causa mayores estragos.

Para los sobrevivientes de las balas y el fuego institucional(5), sólo existen dos caminos: la huida hacia el refugio situado tras la frontera mexicana, o el difícil éxodo buscando refugio clandestino en diversos lugares del país, (principalmente la ciudad capital).

Pero miles de personas eligieron una tercera vía. Negándose a abandonar lo más querido para ellos, (la tierra), deciden resistir los salvajes embates del enemigo buscando refugio bajo la selva, unos y entre las montañas los otros. En ese momento nació lo que con los años iba a desarrollarse como Comunidades de Población en Resistencia-CPR.

El difícil camino de la Resistencia

Bajo la selva del Ixcán y entre las montañas del llamado "Triángulo Ixil", (ver mapa), miles de personas van a buscar refugio para huir de los bombardeos, masacres y persecución del Ejército. La frondosa selva virgen y las abruptas montañas van a convertirse en el hogar de gran cantidad de familias que ante la agresión militar decidieron resistir y no abandonar su tierra.

Durante largos años los hijos de la resistencia van a soportar un terrible cerco militar que trató de eliminarlos físicamente. De igual modo el cerco se encargó de mantener aislada a la población, sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Pero con el paso de los años un paciente y laborioso trabajo de hormigas, (en el que la unión y la organización fueron base fundamental de la lucha), logró abrir pequeños espacios en el cerco. De esta manera la precaria situación en que se encontraban los habitantes del Ixcán y de la Sierra fue conocida por pequeños sectores del exterior que empezaron a apoyar a las Comunidades de Población en Resistencia.

Tras ocho años de contactos totalmente clandestinos se llega al 8 de septiembre de 1990, en que las CPR de la Sierra sacan a la luz su Declaración Pública. El 31 de enero de 1991 fueron las CPR del Ixcán las que hicieron lo mismo. Con estos comunicados las CPR dan a conocer ante la opinión pública nacional e internacional la existencia de comunidades campesinas viviendo entre las montañas y bajo la selva; que ellos son sobrevivientes de las masacres cometidas entre 1980 y 1982; que se trata de población civil no combatiente y que por tanto, las agresiones cometidas contra ellos por parte del Ejército violan tanto la Constitución guatemalteca, como los distintos acuerdos internacionales que sobre el tema de la guerra existen.

El cerco empezaba a romperse. En febrero de 1993 se dio la "1ª Visita por Tierra a las CPR". En esa ocasión centenares de personas nacionales e internacionales viajaron, en buses y camiones primero y tras larga marcha a pie después, hasta las distintas áreas de las CPR. Meses después y como fruto de esa primera visita se inicia, el 10 de julio de 1993, el Acompañamiento Permanente a las CPR. Varias personas del interior y del exterior del país van a convivir con las comunidades para de esta manera formar una especie de escudo protector que frene los impulsos asesinos del Ejército.

Durante todos estos años las CPR han desarrollado una sociedad basada en la unión, la organización, la solidaridad y el trabajo colectivo. Un modelo social que supera con mucho cualquier modelo ensayado en ese sentido.

Hoy en día el cerco está bastante resquebrajado, pero todavía se mantiene firme en algunos lugares.

El gobierno de Ramiro de León Carpio sigue sin reconocer a las CPR como población civil. En las áreas de Resistencia la Constitución Política del país se mantiene permanentemente suspendida.

Las CPR saben que resistir es luchar y que sólo con la lucha se puede alcanzar el auténtico desarrollo de los pueblos.

Por eso la consigna más oída entre las montañas y la selva es:

¡¡¡RESISTIR PARA VIVIR, RESISTIR PARA AVANZAR!!!

Notas:

1. Un análisis profundo del tema se encuentra en: Jonas, Susanne, "Guatemala: plan piloto para el continente", EDUCA, San José de Costa Rica, 1981.

2. La "tierra arrasada" ya fue aplicada en América por los invasores españoles. Más recientemente los ejércitos francés y norteamericano lo aplicaron en su intervención en Indochina.

3. Sobre las olas de terror y la aplicación de este en el período que mencionamos, ver: Figueroa Ibarra, Carlos, "El recurso del miedo", EDUCA, San José de Costa Rica, 1991.

4. El genocida dictador Ríos Montt es hoy en día diputado al Congreso de la República por el partido FRG, (Frente Republicano Guatemalteco).

5. En magnífico trabajo sobre las masacres cometidas en el Ixcán se encuentra en: Falla, Ricardo, "Masacres de la selva", Gakoa/Latino Ed., 1993.

Desde Daroca

“Mi nombre es H.C.,... y me encuentro preso por haber cometido un delito relacionado con la droga. Un error del cual he aprendido mucho, y que me dio la oportunidad de conocer grandes compañeros presos políticos. Con ellos he entablado una amistad que logró romper mi incredulidad de antaño, pensamientos de juventud que habían sido enfriados por el sistema “todo vale”. Lamentablemente, pero así es, ciertos fracasos nos hacen comprender la vida. Aquel viejo error que ocasionó esta situación, aquella confusión creada por el dinero y su valor, me mostró la realidad; esencialmente el valor.”

Así iniciaba hace unas semanas su correspondencia con nosotros un compañero preso al mismo tiempo que nos hacía llegar un trabajo suyo: “PRODUCTIVIDAD, LA CLAVE, ¿PARA QUÉ?... ¿PARA QUIÉN? comentario a una reseña aparecida en el periódico de Buenos Aires “CLARIN” sobre una conferencia dada en aquella ciudad a banqueros y políticos por el economista norteamericano Paul Krugman del que reproducimos algunos extractos:

“...el master norteamericano expone, principalmente, lo importante que es para el crecimiento económico la productividad, aclarando que, “en absoluto es lo mismo que competitividad”. Actualmente en el mundo económico, productividad y competitividad son términos usados en unos casos como unidad y, en otros, como dualidad...”

“Ahora bien: ¿qué es? ¿cómo se obtiene la productividad? La productividad supone producir más en menos tiempo, disminuir el tiempo de trabajo por unidad de producción, hacer que el obrero produzca más, en el mismo tiempo por el mismo sueldo...”

“...podemos afirmar que, y en las regiones con un grado tecnológico bajo, aún más, la productividad recae sobre la fuerza de trabajo, tras las manos, el cerebro y el físico de los trabajadores...”

“...Krugman lanzó al auditorio de políticos, banqueros, asesores, funcionarios, una pregunta clave: ¿Qué es lo que se requiere para lograr un éxito duradero en la economía de hoy?” ¡Vaya preguntita la de Mr. Krugman! Pero bien, en un primer momento hablar o, mejor dicho, pensar en la posibilidad de un éxito duradero en la economía mundial, nos suena a desconocimiento histórico de las constantes crisis del capital... La estabilidad “duradera” es inerte, una gran mentira.”

“Y suponiendo que la crisis del sistema capitalista pudiera ser definitivamente superada, cosa que nosotros negamos objetivamente, y las fantasías de Mr. Krugman y compañía, “crecimiento económico duradero”, se hiciesen realidad, habría que preguntarles: ¿a qué costo se produce el desarrollo de la sociedad bajo las condiciones del capitalismo? Según la opinión de los ecologistas, “no es compatible el respeto al medio ambiente con la idea de crecimiento económico continuado...”

“...Lo que es realmente importante (según dijo Krugman en la conferencia) no es la competitividad sino la productividad”.

Analicemos el sentido de estas afirmaciones, ¿cuál es el fin que persigue el capital? Sin duda su meta es puramente comercial. Los empresarios, los industriales, en fin, los capitalistas necesitan, por leyes objetivas del capital obtener la mayor cuota de ganancia posible. Ésta la logra aumentando el grado de explotación y revolucionando incesantemente los medios de producción. Sólo agrandando constantemente la cuota de plusvalía se garantiza un margen de maniobra para sobrevivir en la selva del “libre mercado”. Su lucha por la productividad no tiene como fin el bienestar social, sino simplemente para su expropiación individual, para su beneficio, pero... el mercado le condiciona.”

Sigue una reflexión sobre el exceso de productividad del sistema en nuestros días lo que crea saturación de los mercados, provoca despidos masivos, ante esto: “...resulta paradójico sostener que la productividad es la clave. La limitación del desarrollo, consecuencia de la crisis de superproducción que padece el sistema capitalista, parece ser la verdadera “clave” que algunos se niegan a ver.”

Finalmente desenmascara la hipocresía del conferenciante al ir a dar recetas a un país latinoamericano al plantearse la siguiente pregunta: “¿Permitirán EE.UU., Alemania, Japón, Francia, Canadá... que Latinoamérica se transforme en un sitio de gran capacidad productiva y, por consiguiente, en un potencial competidor?”

“El capital, y en Latinoamérica aún más, no quiere ni oír hablar de inversiones en capital fijo, su productividad la sostienen y agrandan los trabajadores, sobre las espaldas de los obreros transita la expansión productiva del capital. Hacer que la máquina HUMANA suplante a la máquina real. Esta es la realidad - ¿pues, entonces, la productividad: ¿es la clave?, ¿para qué?... ¿¿Para quién?!”

H.C.

Hemos recibido...

CONTRAFLUJO, n° 1, enero-febrero 1995, Medellín, Colombia. Nuevo boletín del que, por su interés, transcribimos el siguiente artículo.

El indigenismo desde arriba: traficando políticamente y comercialmente en el nombre del pueblo, O como “lo indígena” se convierte en una pelota política y una mercadería más.

Como consecuencia del derrumbe del socialismo autoritario podemos ver con cada vez más claridad la huida de sus ex partidarios profesionales (intelectuales, políticos, ONGs) hacia dos refugios ideológicos no exclusivos: un socialismo “democrático”, y un nacionalismo provincial o “indigenismo desde arriba”. El primero no es otra cosa sino la social democracia: es el sistema que en el nombre de un capitalismo con cara humana preserva el poder económico en las manos de una minoría que nadie elige. El segundo es lo que aquí nos va a ocupar.

Como comentamos en “El Mito de la Patria”, el fenómeno del nacionalismo étnico ahora recorre el mundo como un toro salvaje bailando en las ruinas del “socialismo real” y nutriéndose de la pobreza creciente que ha caracterizado la gran ofensiva del capital desde comienzos de los 70 tanto en el “norte” como en el “sur” del globo.

El nacionalismo étnico asume distintas formas y características según su respectivo lugar de origen. El “indigenismo desde arriba” es el nombre que daremos a la forma que cobra en el Perú de hoy, sobre todo para distinguirlo del indigenismo que ha pertenecido a otros períodos históricos, y que por lo tanto ha tenido un contenido y base social no necesariamente igual.

1) MANIFESTACIONES POLITICAS Y CULTURALES DEL “INDIGENISMO DESDE ARRIBA” EN EL CUSCO.

El alcalde del Cusco, Daniel Estrada, ha decidido dejar atrás su identidad izquierdista a cambio de una identidad de “indigenista independiente”. Su brazo electoral el llamado “Frente Unido” tiene igualmente como el movimiento detrás Javier Pérez de Cuellar el deseo de ser aceptable a todos. La oposición que Estrada muestre frente a Fujimori se basa fundamentalmente en la amenaza que presenta la política centralizadora de éste para todos los gobernadores regionales como Estrada, Belmont, Cáceres etc. Su propio poder está en juego.

El alcalde representa una clase política, atado a un gran sector de la intelectualidad de la región, quienes se han autodespojado de una identidad política que les hacía correr el peligro de ser identificados con tendencias ideológicas “pasadas de moda”. De modo que hallaron una nueva identidad en el “indigenismo” –hasta aquel momento sólo un sub-apéndice populista de su discurso. Esta identidad ya se manifiesta más que nunca en diversos lugares: desde los discursos que se dan en los congresos universitarios y reuniones de ONGs, hasta los monumentos que la municipalidad erige y las publicaciones que subvenciona y promueve.

Estos nuevos indigenistas buscan lo mejor de todos los mundos. Por un lado la identidad indigenista les permite identificarse con las clases populares debido a que en varios momentos históricos el indigenismo (igual que todas formas del nacionalismo) ha adquirido carácter de una “bandera de los oprimidos” – referimos por ejemplo a los movimientos de resistencia que dirigieron Tupac Amaru I en el siglo XVI, Tupac Amaru II en el siglo XVIII y el Movimiento Tahuantinsuyo de 1905-1930 (1).

La nueva vanguardia indigenista quiere beneficiarse de la fama de aquellos revolucionarios sin pagar la entrada. Les conviene la imagen de revolucionario sin sufrir la inconveniencia de serlo. Hablan de 500 años de resistencia pero la única resistencia que realmente les interesa pertenece a la época colonial. Su marca de indigenismo está vinculado estrechamente con su anhelo nacionalista de un “Perú unido”, dentro del cual quieren integrar los pueblos indígenas evitando así los conflictos sociales que rompen el tejido de un país en vías de desarrollo capitalista.

Esta última observación sobre la visión histórica del indigenismo desde arriba se muestra lúcidamente en uno de sus sinnúmeros manifestaciones culturales: el mural histórico de Juan Carlos

Bravo en la avenida Sol. Sin querer negar su alto mérito en muchos aspectos, se nota que su retrato de las luchas sociales en la región sur acaban prematuramente con la llegada de la independencia nacional. De allí el artista nos lleva repentinamente a una nueva aurora florecida en donde todo el pueblo mira hacia un arco iris. Este salto histórico de 1821 hasta el presente es efectivamente la nueva representación oficial de todo un siglo y medio. Están simplemente borradas del escenario, de la historia, todas las luchas sindicales, campesinas, guerrilleras, etc. que tanto han conmovido el “Cusco Rojo” en los últimos 150 años. Como si los conflictos sociales se hubieran acabado en el siglo XIX con la independencia e intensificación del desarrollo capitalista: los dos fenómenos que caracterizan la época republicana en el mural.

El indigenismo de hoy permite que las autoridades regionales y sus aliados intelectuales en las instituciones privadas y públicas se identifiquen con los oprimidos mediante una historia incompleta y mitificada que ellos mismos difunden por los múltiples medios culturales y pedagógicas que manejan. Así tratan de justificar su estatus como representantes del pueblo, ante un pueblo que siempre ha sospechado de las élites que pretenden hablar en nombre suyo.

El indigenismo cuando está desligado de una visión libertadora que se basa en realidades actuales, y cuando está manejado “desde arriba” puede ponerse al servicio del sistema dominante sin mayor grado de contradicción. Esta situación no es tan novedosa. Aún durante la época colonial el incario fue hecho sujeto de grandes mitos que glorificaba aquella época, mientras los descendientes indígenas de los incas siguieran siendo explotados. Desde aquel entonces la gente indígena conoció un tipo de doble esclavitud: a sus amos existente y a su propio pasado.

2) LA CULTURA INDIGENA COMO PRODUCTO EN VENTA

El indigenismo es un discurso que pretende valorar la cultura popular. Pero, ¿qué está pasando con esa cultura?

El capitalismo tiende a mercantilizar todo lo que comprende la vida social humana, y la cultura de un pueblo no constituye ninguna excepción. Esa actividad económica garantiza el bienestar de una minoría. Es precisamente esta minoría (clases medias y altas) que se beneficia ahora de la cultura indígena a través de su contacto económico con el exterior, el turismo por ejemplo. La imagen del “indio” con su pobreza romantizada es lo que adorna los “brochures” turísticos y atrae a los visitantes que gastan en los hoteles, tiendas, restaurantes, etc. Pero, por acaso las ganancias que traen la cultura popular llegan a las clases populares? A quienes creen que el turismo representa la mejor salida económica para el Perú, les sugerimos que echen una miradita hacia otros países como Brasil y México. Esos países reciben tasas de ingresos provenientes del turismo mucho mayores todavía que Perú. Sin embargo, son países marcados por los altos niveles de miseria de sus poblaciones.

El proceso actual de privatizaciones que está afectando la industria de turismo no tiene otro fin que el enriquecimiento de los pocos quienes pueden comprar con millones de dólares las empresas que se encuentran en venta.

La cultura indígena como consecuencia de su comercialización se ve cada vez más estandarizada en el arte y la ropa que se fabrican para vender y exportar. Esta gran micro-industria constituye la base de la nueva dependencia que se vive en el país (2). Una dependencia que no libera sino que esclaviza a los que producen, como puede verificar cualquier persona que se fija en las condiciones laborales y sociales que gozan la gente que se encuentran en la base de la pirámide laboral de esta “industria indígena”.

En fin, la cultura indígena de hoy obedece en gran parte a las leyes del mercado. Son estas leyes que la están definiendo y distorsionando según los requerimientos del mismo mercado. La cultura forma parte de la industria turística, que es una industria explotativa como cualquiera otra.

Mientras tanto, las luchas sociales que se asocian con las reivindicaciones indígenas ya se encuentran en los “museos vivos” que son las ruinas, los monumentos y los archivos. La imagen de potencia incaica sirve para hacer sentir impotentes a los actuales descendientes de los Incas y alienta una cultura de sumisión hacia todo lo que sea autoridad. El indigenismo se ha convertido en un bulto histórico que rompe las espaldas de las multitudes que están obligadas a cargarlo. El Pachachtec desde un lado y la Cruz Blanca desde el otro vigilan los movimientos día y noche de la ciudadanía cusqueña así como el ficticio “Hermano Mayor” de George Orwell. Ambas construcciones representan viejas fábulas que ya sirven para asustar y someter a la población. El día

que se caigan estos dos monumentos será un día feliz para esos hombres y mujeres que buscan su liberación definitiva.

3) CONCLUSIONES

Hemos ubicado el actual resurgimiento del indigenismo dentro el contexto global del nacionalismo étnico y su búsqueda de una identidad histórica. En contraste con el indigenismo que ha convulsionado el escenario político en México, lo del Perú ya carece de su otrora cara de una “ideología de liberación”, no obstante que los políticos populistas siguen aprovechándose de dicha imagen.

Como en la mayoría de los casos al nivel internacional que se han dado en los últimos años, las ideologías o movimientos que se fundamentan en la identidad étnica tienen en el corto plazo el efecto de desviar y dismantelar esos movimientos de orientación clasista que rechazan las falsas divisiones. Más allá, el indigenismo cuando pierde así su carácter de clase se hace la propiedad de los intereses de los élites políticos quienes buscan una fácil identificación con el “pueblo”.

Por otro lado el indigenismo andino en sus expresiones culturales ahora sirve directamente a intereses económicos que, buscando su suerte en todo lo que comprende el comercio de la cultura e historia autóctona, explotan a los mismísimos “indígenas” cuya identidad se ve fetichizada e insinceramente exaltada en el mercado turístico.

Y aquí viene la ironía más dolorosa. “Lo indígena” está al servicio de la industria turística. Esta industria a su vez está al servicio, hasta ser considerado el aporte principal, del venerado “desarrollo” o “progreso” nacional. Pero, ¿por acaso no ha sido el “desarrollo” el motivo en cuyo nombre los pueblos indígenas han sido brutalizados y marginalizados durante los últimos 500 años y hasta hoy día? La venta de la cultura indígena asegura su propia extirpación.

NOTAS

1.- Estos dos últimos tenían un carácter reivindicatorio con elementos social-revolucionarios que iban mucho más allá que una plataforma simplemente “indigenista”, como se suele caracterizarlos en las historias oficiales. Tomamos en cuenta por ejemplo las raíces mestizas de Tupac Amaru II, y la influencia anarquista que se ejercía dentro del Movimiento Tahuantinsuyo, una influencia que enfatizaba en su ideología la unidad de los explotados del mundo de todas las culturas y razas. Véase *Sociedad colonial y sublevaciones populares* (Flores Galindo 1976) y *Ayllus del Sol - Anarquismo y Utopía Andina* (Kapsoli, 1984).

2.- Mientras la dependencia en su sentido tradicional se refiere a la presencia de capital extranjero en las industrias de extracción (Petroperu, las minas de Tintaya etc), esta “nueva dependencia” se basa en la industria de servicios y producción cultural que conforman el turismo, junto con la aceptación de las recetas del FMI y el Banco Mundial. El resultado es que Perú se está convirtiendo en un país de mendigos: desde el niño que pide limosna en las puertas de los restaurantes turísticos y “pitucos” hasta el profesional quien se obsesiona por conseguir una “ayuda” de afuera.

Nosotros entendemos dependencia como una relación universal capital-proletariado y no como una relación fija entre países o bloques geográficos. Que el capital se acumula por períodos en ciertas regiones llevó a los teóricos de la Dependencia a creer equivocadamente que el capital tiene afiliaciones permanentes con los países “ricos” y por ende que la solución a la miseria y hambre se encontraría en un nacionalismo tercermundista.

GUY DEBORD. 1931-1994

El 30 de Noviembre de 1994 se suicidaba Guy Debord oponiéndose así a una progresiva y penible degeneración física. Desaparece otra de las aportaciones críticas a la sociedad actual, aunque nos queda lo ya escrito.

Debord nos ayudó a entender este mundo dándonos sus razones para rechazarlo. Teórico y propagandista de la revolución moderna comprendió, en profundidad, su época lo que le permitió ver más allá, anticipando rasgos importantes de su discurrir ulterior. Definió esta sociedad como espectáculo, relación social entre personas mediatizada a través de imágenes: La sociedad del espectáculo, 1967 (La Flor, 1974; Castellote, 1977). Ya en 1960 escribía con P. Canjuers de Socialisme ou Barbarie: “Fuera del trabajo, el espectáculo es el modo dominante de poner en relación a los hombres entre ellos. Es sólo a través del espectáculo que los hombres

llegan a un conocimiento –falsificado– de ciertos aspectos del conjunto de la vida social”. En 1988, en sus Comentarios a la Sociedad del Espectáculo (Anagrama, 1990), añadía a las formas sucesivas del poder espectacular, definidas en el 67, la concentrada (el nazismo y el estalinismo) y la difusa (la americanización de la vida), la espectacular integrada que tiende a imponerse mundialmente: al espectacular concentrado se le escapa aún la mayor parte de la periferia y cuando era difuso, sólo una pequeña parte; hoy, a la forma espectacular integrada, nada escapa. Caracterizaba a esta sociedad del espectáculo integrado por el efecto combinado de cinco rasgos: la incesante renovación tecnológica, la fusión económico-estatal, el secreto generalizado, lo falso sin réplica, un presente perpetuo.

Su crítica hoy nos ayuda. No reverenciamos sus citas: recalamos en su crítica y avanzamos. La sociedad en la que muere Debord es la misma de la crítica situacionista y ya hay rasgos distintos a partir de los cambios habidos en el proceso productivo. Hoy el “détournement” es innecesario por obvio: las palabras que el Estado avanza son ya descaradas, cónicas.

El hecho de la posible recuperación de la crítica situacionista y el hecho del carácter polémico o injurioso que el mismo Debord magnificó no disminuyen nuestro interés por su obra. Ciertamente el situacionismo, como otrora el surrealismo, es mostrado en museos y desde las universidades puede recomendarse la lectura de Nadja o de La Sociedad del espectáculo, como textos subversivos, pero su recuperación no invalida la fuerza de su crítica; muestra, más bien, nuestra debilidad para imponerla. Respecto a su carácter, pensamos, más bien con Traven, que “un escritor no debería tener otra biografía que sus libros”.

En España queda por hacer la edición completa de los textos situacionistas. Están por traducir los doce números de la Internationale Situationniste, y toda la filmografía de Debord, desde Hurlements en faveur de Sade, 1952, hasta su último film Im girum imus nocte et consumimur igni, 1978, culminación de su crítica y desprecio de la sociedad, que finaliza con estas palabras de Marx dirigidas a Ruge: “Usted no podrá decirme que aprecio demasiado el tiempo presente; y si de él aún no desespero es a causa de su propia situación desesperada, que me llena de esperanzas”.